2. CONSTITUCION POLITICA DE MEXICO, PROMULGADA
EL 5 DE FEBRERO DE 1917

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

La nación tendrá en todo tiempo el derecho a imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la Ley Reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola en explotación; para la creación de nuevos centros de población agrícola con tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los núcleos de población que carezcan de tierras, o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad agrícola en explotación.

Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales y orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional.

Son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas, en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzados por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fije la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno; pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aun establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se consideran como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados.

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible, y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y con-

VI. Fuera de las corporaciones a que se refieren las fracciones III, IV y V, así como de los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o de los núcleos dotados, restituidos o constituidos en centro de población agrícola, ninguna otra corporación civil podrá tener en propiedad o administrar por sí bienes raíces o capitales impuestos sobre ellos, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al objeto de la institución. Los Estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.

Las leyes de la Federación y de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.

El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las disposiciones del presente artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las tierras o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes de que se dicte sentencia ejecutoriada.

VII. Los núcleos de población que, de hecho o por derecho, guarden el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les hayan restituido o restituyeren.

Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población. El Ejecutivo Federal se abocará al conocimiento de dichas cuestiones y propondrá a los interesados la resolución definitiva de las mismas. Si estuvieren conformes, la proposición del Ejecutivo tendrá fuerza de resolución definitiva y será irrevocable; en caso contrario, la

parte o partes inconformes podrán reclamarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin perjuicio de la ejecución inmediata de la proposición presidencial.

La ley fijará el procedimiento breve conforme el cual deberán tramitarse las mencionadas controversias;

VIII. Se declaran nulas:

a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, gobernadores de los Estados o cualquiera otra autoridad local, en contravención a lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas.

b) Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes hechas por las secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el día 1º de diciembre de 1876 hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquiera otra clase pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades y núcleos de población.

c) Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el período de tiempo a que se refiere la fracción anterior por compañías, jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federación, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquier otra clase pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades y núcleos de población.

Quedan exceptuadas de la nulidad anterior únicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos con apego a la ley del 25 de junio de 1856 y poseídas en nombre propio a título de dominio por más de diez años, cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas.

IX. La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legítima entre los vecinos de algún núcleo de población y en el que haya habido error o vicio, podrá ser nulificada cuando así lo soliciten las tres cuartas partes de los vecinos que estén en posesión de una cuarta parte de los terrenos materia de la división, o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las tres cuartas partes de los terrenos.

X. Los núcleos de población que carezcan de ejidos o que no puedan lograr su restitución por falta de títulos, por imposibilidad de identificarlos, o porque legalmente hubieren sido enajenados, serán dotados con tierras y

Inversamente, cuando las Comisiones Mixtas no formularen dictamen en plazo perentorio, los gobernadores tendrán facultad para conceder posesiones en la extensión que juzguen procedente.

XIII. La dependencia del Ejecutivo y el Cuerpo Consultivo Agrario dictaminarán sobre la aprobación, rectificación o modificación de los dictámenes formulados por las Comisiones Mixtas, y con las modificaciones que hayan introducido los gobiernos locales, se informará al ciudadano presidente de la República, para que éste dicte resolución como suprema autoridad agraria.

XIV. Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas que se hubiesen dictado en favor de los pueblos, o que en lo futuro se dictaren, no tendrán ningún derecho, ni recurso legal ordinario, ni podrán promover el juicio de amparo.

Los afectados con dotación, tendrán solamente el derecho de acudir al Gobierno Federal para que les sea pagada la indemnización correspondiente. Este derecho deberán ejercitarlo los interesados dentro del plazo de un año, a contar desde la fecha que se publique la resolución respectiva en el *Diario Oficial* de la Federación. Fenecido este término, ninguna reclamación será admitida.

Los dueños o poseedores de predios agrícolas o ganaderos, en explotación, a los que se haya expedido o en lo futuro se expida, certificado de inafectabilidad, podrán promover el juicio de amparo contra la privación o afectación agraria ilegales de sus tierras o aguas.

XV. Las Comisiones Mixtas, los gobiernos locales y las demás autoridades encargadas de las tramitaciones agrarias, no podrán afectar, en ningún caso, la pequeña propiedad agrícola o ganadera en explotación e incurrirán en responsabilidad, por violaciones a la Constitución, en caso de conceder dotaciones que la afecten.

Se considerará pequeña propiedad agrícola la que no exceda de cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras en explotación.

Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de monte o de agostadero en terrenos áridos.

Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, las superficies que no excedan de doscientas hectáreas en terrenos de temporal o de agostadero susceptibles de cultivo; de ciento cincuenta cuando las tierras se dediquen al cultivo del algodón, si reciben riego de avenida fluvial o por bombeo; de trescientas, en explotación, cuando se destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao o árboles frutales.

Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda de la superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos.

Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad a la que se le haya expedido certificado de inafectabilidad, se mejore la calidad de sus tierras para la explotación agrícola o ganadera de que se trate, tal propiedad no podrá ser objeto de afectaciones agrarias, aun cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley.

XVI. Las tierras que deban ser objeto de adjudicación individual deberán fraccionarse precisamente en el momento de ejecutar las resoluciones presidenciales, conforme a las leyes reglamentarias.

XVII. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirán leyes para fijar la extensión máxima de la propiedad rural, y para llevar a cabo el fraccionamiento de los excedentes, de acuerdo con las siguientes bases:

- a) En cada Estado, y en el Distrito Federal se fijará la extensión máxima de tierra de que pueda ser dueño un solo individuo o sociedad legalmente constituida.
- b) El excedente de la extensión fijada deberá ser fraccionado por el propietario en el plazo que señalen las leyes locales, y las fracciones serán puestas a la venta en las condiciones que aprueben los gobiernos, de acuerdo con las mismas leyes.
- c) Si el propietario se opusiese al fraccionamiento, se llevará éste a cabo por el gobierno local, mediante la expropiación.
- d) El valor de las fracciones será pagado por anualidades que amorticen capital y rédito a un tipo de interés que no exceda de 3 por ciento anual.
- e) Los propietarios estarán obligados a recibir bonos de la Deuda Agraria local para garantizar el pago de la propiedad expropiada. Con este objeto, el Congreso de la Unión expedirá una ley facultando a los Estados para crear su Deuda Agraria.
- f) Ningún fraccionamiento podrá sancionarse sin que hayan quedado satisfechas las necesidades agrarias de los poblados inmediatos. Cuando existan proyectos de fraccionamiento por ejecutar, los expedientes agrarios serán tramitados de oficio en plazo preteritorio.

g) Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno.

XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechos por los gobiernos anteriores desde el año 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, agua y riquezas naturales de la Nación por una sola persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Unión para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés público.

3. CONSTITUCION POLITICA DE CHILE (1925). REFORMA CONSTITUCIONAL DE 16-VII-71

Artículo 10. Asimismo, la Constitución asegura a todos los habitantes de la República:

Nº 10. El derecho de propiedad en sus diversas especies.

La ley establecerá el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social y hacerla accesible a todos.

La función social de la propiedad comprende cuanto exijan los intereses generales del Estado, la utilidad y la salubridad públicas, el mejor aprovechamiento de las fuentes y energías productivas en el servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes.

Cuando el interés de la comunidad nacional lo exija, la ley podrá nacionalizar o reservar al Estado el dominio exclusivo de recursos naturales, bienes de producción u otros, que declare de importancia preeminente para la vida económica, social o cultural del país. Propenderá, asimismo, a la conveniente distribución de la propiedad y a la constitución de la propiedad familiar.

El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales.

La ley determinará qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso anterior, entre las cuales no podrán considerarse los hidrocarburos líquidos y gaseosos, podrán ser objeto de concesiones de exploración o de explotación, la

forma y resguardos del otorgamiento y disfrute de dichas concesiones, la materia sobre que recaen, los derechos y obligaciones a que darán origen y la actividad que los concesionarios deberán desarrollar en intereses de la colectividad para merecer amparo y garantías legales. La concesión estará sujeta a extinción en caso de no cumplirse los requisitos fijados en la ley para mantenerla.

La ley asegurará la protección de los derechos del concesionario y en especial de sus facultades de defenderlos frente a terceros y de usar, gozar y disponer de ellos por acto entre vivos o por causa de muerte, sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior. En aquellas cuestiones sobre otorgamiento, ejercicio o extinción de las concesiones que la ley entregue a la resolución de la autoridad administrativa, entre las cuales no podrán estar las que se refieren a la fijación de los requisitos de amparo, habrá siempre lugar a reclamo ante los tribunales ordinarios de justicia.

Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, calificada por el legislador. El expropiado tendrá siempre derecho a indemnización cuyo monto y condiciones de pago se determinarán equitativamente tomando en consideración los intereses de la colectividad y de los expropiados. La ley determinará las normas para fijar la indemnización, el tribunal que conozca de las reclamaciones sobre su monto, el que en todo caso fallará conforme a derecho, la forma de extinguir esta obligación, y las oportunidades y modo en que el expropiador tomará posesión material del bien expropiado.

Cuando se trate de expropiación de predios rústicos, la indemnización será equivalente al avalúo vigente para los efectos de la contribución territorial, más el valor de las mejoras que no estuvieren comprendidas en dicho avalúo, y podrá pagarse con una parte al contado y el saldo en cuotas en un plazo no superior a treinta años, todo ello en la forma y condiciones que la ley determine.

Cuando se trate de nacionalización de actividades o empresas mineras que la ley califique como Gran Minería, la nacionalización podrá comprender a ellas mismas, a derechos en ellas o a la totalidad o parte de sus bienes. La nacionalización podrá también extenderse a bienes de terceros, de cualquier clase, directa y necesariamente destinados a la normal explotación de dichas actividades o empresas. El monto de la indemnización o indemnizaciones, según los casos, podrá determinarse sobre la base del costo original de dichos bienes, deducidas las amortizaciones, depreciaciones, castigos y desvalorizaciones por obsolescencia. También podrá deducirse del monto de la indemnización el todo o partes de las rentabilidades excesivas que hubieren obtenido las empresas nacionalizadas. La indemnización será pagada en dinero, a menos que el afectado

acepte otra forma de pago, en un plazo no superior a treinta años y en las condiciones que la ley determine. El Estado podrá tomar posesión material de los bienes comprendidos en la nacionalización inmediatamente después que ésta entre en vigencia. El afectado sólo podrá hacer valer en contra del Estado, en cuanto se relacione con la nacionalización, el derecho a la indemnización regulada en la forma antes indicada. La ley podrá determinar que los socios o accionistas de las empresas nacionalizadas no tendrán otros derechos que hacer valer, sea en contra del Estado, sea recíprocamente entre ellos, que el de percibir la cuota o parte proporcional que les corresponde de la indemnización que reciban las respectivas empresas. Asimismo, la ley podrá, en cuanto atañe al Estado, determinar qué terceros, exceptuados los trabajadores de la actividad o empresa nacionalizada, puedan hacer valer sus derechos sólo sobre la indemnización.

La ley podrá reservar al dominio nacional de uso público todas las aguas existentes en el territorio nacional y expropiar, para incorporarlas a dicho dominio, las que sean de propiedad particular. En este caso, los dueños de las aguas expropiadas continuarán usándolas en calidad de concesionarias de un derecho de aprovechamiento y sólo tendrán derecho a la indemnización cuando por la extinción total o parcial de ese derecho, sean efectivamente privados del agua suficiente para satisfacer, mediante un uso racional y beneficioso, las mismas necesidades que satisfacían con anterioridad a la extinción.

La pequeña propiedad rústica trabajada por su dueño y la vivienda habitada por su propietario no podrán ser expropiadas sin previo pago de la indemnización.

En los casos en que el Estado o sus organismos hayan celebrado o celebren con la debida autorización o aprobación de la ley, contratos o convenciones de cualquier clase en que se comprometan a mantener en favor de particulares determinados regímenes legales de excepción o tratamientos administrativos especiales, éstos podrán ser modificados o extinguidos por ley cuando lo exija el interés nacional.

En casos calificados, cuando se produzca como consecuencia de la aplicación del inciso anterior, un perjuicio directo, actual y efectivo, la ley podrá disponer una compensación a los afectados.

4. CONSTITUCION POLITICA DEL PERU (PROMULGADA EL 29 DE MARZO DE 1933)

Artículo 16. Están prohibidos los monopolios y acaparamientos industriales y comerciales. La ley fijará las penas que se impongan a los contraventores. Sólo la ley puede establecer monopolios y estancos del Estado en exclusivo interés nacional.

Artículo 17. Las compañías mercantiles, nacionales o extranjeras, están sujetas, sin restricciones, a las leyes de la República. En todo contrato del Estado con extranjeros, o en las concesiones que otorgue aquél en favor de éstos, debe constar el sometimiento expreso de los segundos a las leyes y a los tribunales de la República y su renuncia a toda reclamación diplomática.

Concordancias

Código Civil. — Título Preliminar. Art. IX. La existencia y capacidad civil de las personas jurídicas extranjeras, de derecho privado, se rigen por la ley del país en el cual se han constituido.

La capacidad de las personas jurídicas extranjeras nunca podrá ser contraria al orden público ni más extensa que la concedida a las nacionales.

Artículo 29. La propiedad es inviolable, sea *material, intelectual, literaria o artística*. A nadie se puede privar de la suya sino por causa de utilidad pública probada legalmente y previa indemnización justipreciada. (Modificado por el artículo 1º de la ley N° 15.242).¹

-
1. Ley N° 15.242. — El Presidente de la República.

Por cuanto:

El Congreso ha dado la ley siguiente:

El Congreso de la República peruana

Ha dado la ley siguiente:

Artículo 1º Modifícase el artículo 29 de la Constitución del Estado, en los términos siguientes:

Artículo 29. La propiedad es inviolable. A nadie se puede privar de la suya sino en virtud de mandato judicial por causa de utilidad pública o de interés social, probada legalmente y previa indemnización justipreciada.

Cuando se trata de expropiación con fines de Reforma Agraria, irrigación, colonización o ensanche y acondicionamiento de poblaciones, o de expropiación de fuentes de energía o por causa de guerra o calamidad pública, la ley podrá establecer que el pago de la indemnización, se realice a plazos o en armadas o se cancele mediante bonos de aceptación obligatoria. La ley señalará los plazos de pago, el tipo de interés, el monto de la misma y las demás condiciones a que haya lugar, y determinará la suma hasta la cual el pago de la indemnización será hecha necesariamente en dinero y previamente.

Artículo 2º Modifícase el artículo 47 de la Constitución del Estado, en los términos siguientes:

"Artículo 47. El Estado favorecerá la conservación y difusión de la pequeña y mediana propiedad rural. La ley fijará la extensión máxima de tierra de que puede ser dueño una sola persona natural o jurídica, según el tipo de explotación a que la tierra se dedique y tomando en cuenta las peculiaridades demográficas, sociales y geográficas de cada zona o región, así como las condiciones naturales y técnicas de producción.

"El Estado dará el apoyo económico y técnico necesario para desarrollar la propiedad rural y los sistemas cooperativo y comunitario de explotación y comercialización".

Artículo 3º Modifícase el artículo 211 de la Constitución del Estado, en los términos siguientes:

"Artículo 211. El Estado procurará de preferencia adjudicar tierras a las comuni-

Artículo 31. La propiedad, cualquiera que sea el propietario, está regida exclusivamente por las leyes de la República y se halla sometida a las contribuciones, gravámenes y limitaciones que ellos establezcan.

Artículo 32. Los extranjeros están, en cuanto a la propiedad, en la misma condición que los peruanos, sin que en ningún caso puedan invocar al respecto situación excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas.

Artículo 34. La propiedad debe usarse en armonía con el interés social. La ley fijará los límites y modalidades del derecho de propiedad.

Artículo 35. La ley puede, por razones de interés nacional, establecer restricciones y prohibiciones especiales para la adquisición y transferencia de determinadas clases de propiedad, sea por su naturaleza, o por su condición, o por su situación en el territorio.

Artículo 36. Dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por ningún título, tierras, aguas, minas o combustibles, directa o indirectamente, individualmente o en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, la propiedad adquirida, excepto el caso de necesidad nacional declarada por ley expresa.

Artículo 37. Las minas, tierras, bosques, aguas y, en general, todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, salvo los derechos legalmente adquiridos. La ley fijará las condiciones de su utilización por el Estado, o de su concesión, en propiedad o en usufructo, a los particulares.

Artículo 38. El Estado puede, mediante una ley, tomar a su cargo o nacionalizar los transportes terrestres, marítimos, fluviales, lacustres, aéreos u otros servicios públicos de propiedad privada, previa indemnización y de conformidad con las leyes existentes.

5. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL BRASIL (PROMULGADA
EL 1º DE NOVIEMBRE DE 1937)

Artículo 16. Compete privativamente a la Unión el poder de legislar sobre las siguientes materias:

8. Los monopolios o nacionalización de industrias.

---

dades de indígenas que no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, y podrá expropiar con tal propósito, las tierras de propiedad privada conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 29".

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Casa del Congreso, en Lima, a los dieciocho días del mes de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro.

Ramiro Priale, Presidente del Senado.

Artículo 122. La Constitución garantiza a los brasileños y extranjeros residentes en el país el derecho a la libertad, a la seguridad individual y a la propiedad en la forma siguiente:

14. El derecho de propiedad, salvo la expropiación por necesidad o utilidad pública, mediante indemnización previa. Su contenido y sus límites serán los determinados en las leyes reguladoras de su ejercicio.

6. CONSTITUCION POLITICA DE NICARAGUA (PROMULGADA
EL DIA 22 DE MAYO DE 1939)

Artículo 39. Se prohíben los monopolios en interés privado y toda clase de acaparamientos industriales o comerciales.

Sólo la ley puede establecer monopolios y estancos del Estado en exclusivo interés nacional.

Artículo 53. El Estado puede nacionalizar las empresas de servicio público, previa indemnización y de conformidad con la ley.

De las Garantías Sociales

Artículo 63. La propiedad es inviolable. A nadie se puede privar de la suya sino en virtud de sentencia judicial de contribución general o por causa de utilidad pública o interés social calificados por una ley o por sentencia fundada en ella, previa justa indemnización.

En caso de guerra nacional, de conmoción interna o de calamidad pública, podrán las autoridades competentes usar de la propiedad particular hasta donde el bien público lo exija, dejando a salvo el derecho a indemnización ulterior.

Artículo 64. El Estado garantiza y protege la propiedad intelectual, los derechos del autor, del inventor y del artista. La ley regula su ejercicio y duración, y si ella exigiere su expropiación, será mediante previa indemnización justipreciada.

Artículo 65. La propiedad en virtud de su función social impone obligaciones. Su contenido, naturaleza y extensión están fijados por la ley.

Artículo 66. El derecho de propiedad, en cuanto a su ejercicio, está sometido a las limitaciones que impone el mantenimiento y progreso del orden social. En armonía con este principio, la ley podrá gravar la propiedad con obligaciones, o servidumbres de utilidad pública en favor de los intereses generales del Estado, de la salud de los ciudadanos y de la salubridad pública.

Artículo 67. La propiedad, sea quien fuere su dueño, se rige exclusivamente por las leyes de la República y se halla afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la Constitución y las leyes.

7. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
(PROMULGADA EL DIA 10 DE JULIO DE 1940)

Artículo 13. En ningún caso los intereses privados primarán sobre el interés general de la nación paraguaya. Todos los ciudadanos están obligados a prestar su colaboración en bien del Estado y de la nación paraguaya. La ley determinará en qué casos estarán obligados a aceptar funciones públicas, de acuerdo con sus condiciones de idoneidad.

Artículo 14. Queda proscripta la explotación del hombre por el hombre. Para asegurar a todo trabajador un nivel de vida compatible con la dignidad humana, el régimen de los contratos de trabajo y de los seguros sociales y las condiciones de seguridad e higiene de los establecimientos, estarán bajo la vigilancia y fiscalización del Estado.

Artículo 15. El Estado regulará la vida económica nacional. Sólo él tiene la facultad de hacer acuñaciones o emisiones de monedas, establecer sistemas de pesas y medidas y controlar las marcas. No se permitirán las combinaciones que tiendan al acaparamiento de artículos de consumo, el alza o a la baja artificial de los precios y a impedir la libre concurrencia. Quedan prohibidos la fabricación y el tráfico de artículos dañosos para la salud y las buenas costumbres. La ley establecerá las penas para los actos que contravengan estos principios. El Estado podrá nacionalizar, con indemnización, los servicios públicos, y monopolizar la producción, circulación y venta de artículos de primera necesidad.

8. CONSTITUCION POLITICA DE GUATEMALA (PROMULGADA
EL 11 DE MARZO DE 1945)

Régimen económico y hacendario

Artículo 88. El Estado orientará la economía nacional en beneficio del pueblo, a fin de asegurar a cada individuo una existencia digna y provechosa para la colectividad.

Es función primordial del Estado fomentar las actividades agropecuarias y la industria en general, procurando que los frutos del trabajo beneficien de preferencia a sus productores y la riqueza alcance al mayor número de habitantes de la República.

Artículo 89. Son bienes de la nación:

1. Los de dominio público;
2. Las aguas de la zona marítima que ciñe las costas de la República; las riberas de los lagos y ríos navegables; los ríos y lagos navegables o

flotables; los ríos de cualquier clase que sirvan de límite a la República y las caídas de agua de aprovechamiento industrial, en la forma que determine la ley, la que asimismo, establecerá la extensión y condiciones del dominio sobre todos estos bienes;

3. Los que constituyen el patrimonio del Estado y del municipio;
4. La zona marítimo-terrestre de las costas de la República, en la extensión fijada por la ley;
5. La atmósfera y la estratosfera situadas sobre el territorio nacional. Su tránsito y aprovechamiento se regulan por la ley y los tratados internacionales;
6. Los ingresos fiscales y municipales, origrnarios y de derecho público;
7. El subsuelo de la nación; los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como todas las subsistencias orgánicas e inorgánicas que determine la ley, y
8. Todos los demás bienes existentes en el territorio nacional, que señalen las leyes, o que no sean de propiedad particular, individual o colectiva.

Artículo 90. El Estado reconoce la existencia de la propiedad privada y la garantiza como función social, sin más limitaciones que las determinadas en la ley, por motivos de necesidad o utilidad públicas o de interés nacional.

Artículo 91. Quedan prohibidos los latifundios. La ley los califica y consignará las medidas necesarias para su desaparición. Los latifundios existentes por ningún motivo podrán ensancharse, y mientras se logra su redención en beneficio de la colectividad, serán objeto de gravámenes en la forma que determine la ley.

El Estado procurará que la tierra se reincorpore al patrimonio nacional.

Sólo los guatemaltecos a que se refiere el artículo 6º de esta Constitución, las sociedades cuyos miembros tengan esa calidad y los bancos nacionales, podrán ser propietarios de inmuebles sobre la faja de quince kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras y litorales. Se exceptúan las áreas urbanizadas comprendidas dentro de las zonas indicadas, en las cuales sí podrán adquirir propiedad los extranjeros, previa autorización gubernativa.

Artículo 92. Por causa de utilidad o necesidad públicas o interés social legalmente comprobado, puede ordenarse la expropiación de la propiedad privada, previa indemnización. En caso de invasión o ataque al territorio nacional

o grave perturbación del orden interior, no es forzoso que la indemnización sea previa. Con motivo de guerra la propiedad enemiga puede ser objeto de intervención, y si fuere expropiada cabe reservar el pago de la indemnización para cuando la guerra concluya. Una ley determinará el procedimiento de expropiación.

Por causa de delito político no puede ser limitada la propiedad en forma alguna.

Se prohíbe la confiscación de bienes.

Artículo 93. El dominio directo del Estado sobre los bienes es inalienable e imprescriptible. Se exceptúan los excesos de la propiedad particular, los derechos adquiridos para los efectos de la titulación, y los bienes muebles, derechos y acciones.

El Estado podrá otorgar, en las condiciones que determina la ley, el dominio útil de sus inmuebles rústicos, con el objeto de que los trabajen, preferentemente a colectividades y, en su defecto, a familias, a sociedades no accionadas --salvo aquellas que organice y en que participe el Estado --, a individuos guatemaltecos o a inmigrantes contratados por el gobierno.

Por causa de necesidad o utilidad pública, o interés social, y en casos de excepción, el Estado puede enajenar sus bienes urbanos o permutar pequeños lotes rústicos en la extensión que señale la ley.

Artículo 94. El Estado proporcionará a las colectividades y cooperativas agrícolas, instrucción técnica, dirección administrativa, maquinaria y capital.

Artículo 95. Los contratos para explotar minerales o yacimientos de hidrocarburos, pueden celebrarse por un término que no exceda de cincuenta años, y los relacionados con aguas nacionales, por un plazo no mayor de veinticinco años. En ambos casos se requiere la aprobación del Congreso.

Los yacimientos de hidrocarburos y sus derivados solamente pueden ser explotados por el Estado, por guatemaltecos, o por compañías guatemaltecas cuyo capital sea predominantemente nacional.

Los contratos sobre corta de maderas deberán salir a licitación pública y concederse de preferencia a trabajadores guatemaltecos, quienes no podrán ceder sus derechos sin autorización gubernativa. La ley determinará la forma de extracción y explotación de resinas, gomas y demás productos similares.

Artículo 96. Las tierras ejidales y las de comunidades que determina la ley, son inalienables, imprescriptibles, inexpropiables e indivisibles. El Estado les prestará apoyo preferentemente a fin de organizar en ella el trabajo en forma

cooperativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 94, y deberá, asimismo, dotar de terrenos a las comunidades que carezcan de ellos.

Artículo 97. Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo en general, salvo las limitaciones que, por motivos económicos, fiscales o sociales, de interés nacional, impongan las leyes.

El autor o inventor goza de la propiedad exclusiva de su obra o invento por un tiempo que no exceda de quince años. La propiedad literaria o artística se rige por lo que determinan la ley y los tratados. La ley dispondrá lo necesario para la mayor eficacia y estímulo del trabajo e incremento de la producción.

Artículo 98. El ejecutivo sólo podrá otorgar concesiones por un término que no pase de diez años, a quienes introduzcan o establezcan industrias nuevas en la República; pero no con el carácter de prohibitivas de industrias análogas o similares.

Para el establecimiento de servicios públicos de gran utilidad que requieran la inversión de cuantiosos capitales, el Estado puede celebrar contratos y otorgar, en tal caso, concesiones por un término no mayor de cincuenta años. Los contratos y concesiones a que se refiere este artículo deben ser aprobados por el Congreso. Una nueva concesión en ningún caso podrá modificar el plazo y las demás condiciones estipuladas en una concesión anterior, aun cuando la segunda sea una extensión de la primera.

Se prohíben los monopolios y los privilegios.

Artículo 99. El Estado prohibirá la creación o limitará el funcionamiento de empresas que absorban o tiendan a absorber en perjuicio de la economía nacional, la producción de uno o más ramos industriales, o de una determinada actividad comercial. Una ley determinará lo relativo a esta materia.

Artículo 100. Se declara de urgente utilidad social el establecimiento de sociedades cooperativas de producción, así como la legislación que las organice y fomenta.

Artículo 101. La forma y condiciones de reversión, revisión y renegociación de concesiones y contratos administrativos, serán determinadas por la ley.

Artículo 102. En toda concesión que otorgue o contrato que celebre el Estado o el municipio para el establecimiento de obras y servicios de utilidad pública, se estipulará la condición de que esas obras o servicios, transcurrido cierto tiempo que no podrá ser mayor de cincuenta años, o al vencimiento del contrato, pasarán, en perfecto estado de servicio, al dominio del Estado o del municipio, sin indemnización alguna.

9. CONSTITUCION POLITICA DE BOLIVIA (PROMULGADA
EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1947)

Régimen económico y financiero

Artículo 107. El régimen económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar para todos los habitantes una existencia digna del ser humano.

108. Son del dominio originario del Estado, a más de los bienes a los que actualmente señala la ley de esa calidad, todas las sustancias del reino mineral, las tierras baldías con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como todas las fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento económico. Las leyes establecerán las condiciones de este dominio, así como las de adjudicación a los particulares.

109. El Estado podrá regular, mediante ley, el ejercicio del comercio y de la industria, cuando así lo requieran con carácter imperioso, la seguridad o necesidad públicas. Podrá también en estos casos asumir la dirección superior de la economía nacional. Esta intervención se ejercerá en forma de control, de estímulo o de gestión directa.

110. El Estado podrá, con cargo de aprobación legislativa del Congreso, establecer el monopolio fiscal de determinadas exportaciones, siempre que las necesidades del país así lo requieran. Controlará asimismo las disponibilidades de moneda extranjera.

La exportación del petróleo y sus derivados, de propiedad fiscal o particular, sólo se hará por intermedio del Estado o de una entidad que lo represente.

111. Todas las empresas establecidas para explotaciones, aprovechamientos o negocios en el país, se considerarán nacionales y estarán sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la República.

10. CONSTITUCION POLITICA DE ARGENTINA (PROMULGADA
EL 11 DE MARZO DE 1949)

CAPÍTULO IV

*La función social de la propiedad, el capital
y la actividad económica*

Artículo 38. La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del

campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. La expropiación, por causa de utilidad pública o interés general, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4º Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invención o descubrimiento por el término que le acuerda la ley. La confiscación de bienes queda abolida para siempre de la legislación argentina. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie en tiempo de paz.

Artículo 39. El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino.

Artículo 40. La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguarda de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto, dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios.

Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias.

Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine.

El precio de la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión, y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido.

11. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
(7 DE NOVIEMBRE DE 1949)

Artículo 45. La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia.

Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social.

Artículo 46. Son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria.

Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora.

Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación especial.

Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las Municipalidades se requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.

12. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
(PROMULGADA EL 25 DE ENERO DE 1952)

Artículo 32. La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieron por razones de interés general.

Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recimiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación.

Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad públicas, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la mora, se consume o no la expropiación.

13. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
(21 DE DICIEMBRE DE 1957)

Artículo 155. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley o sentencia fundada en ley.

Artículo 156. La expropiación de bienes por causa de necesidad o utilidad pública, debe ser calificada por la ley o por sentencia fundada en ley, y no se verificará sin previa indemnización.

En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa; sin embargo, el pago correspondiente se hará, a más tardar, dos años después de concluido el Estado de emergencia.

Artículo 157. Se reconoce la función social de la propiedad privada. Las limitaciones que establezca la ley, tendrán por base motivos de necesidad y utilidad pública o de interés social.

Artículo 158. El derecho de propiedad no perjudicará el derecho eminente del Estado dentro de sus límites territoriales, ni podrá sobreponerse a los derechos que tengan las instituciones nacionales o las obras de carácter nacional.

Artículo 159. Los terrenos del Estado, ejidales, comunales o de propiedad privada situados en las zonas limítrofes a los Estados vecinos; los situados en el litoral de ambos mares, en una extensión de cuarenta kilómetros hacia el interior del país, y los de las islas, cayos, arrecifes, escolladeros, peñones, sirtes y bancos de arena, sólo podrán ser adquiridos en dominio pleno o menos pleno, por hondureños de nacimiento, por sociedades integradas en su totalidad por socios hondureños, y por los Bancos del Estado, bajo pena de nulidad del respectivo acto o contrato.

Se prohíbe a los Registradores de la Propiedad la inscripción de documentos que contraríen esta disposición.

Se exceptúan los bienes urbanos.

14. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR (PROMULGADA EL DIA 8 DE ENERO DE 1962)

Régimen económico

Artículo 135. El régimen económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano.

Artículo 136. Se garantiza la libertad económica en lo que no se oponga al interés social.

El Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada, dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y para asegurar los beneficios de ésta al mayor número de habitantes del país.

Artículo 137. Se reconoce y garantiza la propiedad privada en función social.

Se reconoce asimismo la propiedad intelectual y artística, por el tiempo y en la forma determinados por la ley.

El subsuelo pertenece al Estado, el cual podrá otorgar concesiones para su explotación.

Artículo 138. La expropiación procederá por causa de utilidad pública o de interés social, legalmente comprobados, y previa una justa indemnización. Cuando la expropiación sea motivada por necesidades provenientes de guerra o de calamidad pública, y cuando tenga por objeto el aprovisionamiento de aguas o de energía eléctrica, o la construcción de viviendas o de carreteras, la indemnización podrá no ser previa.

Cuando lo justifique el monto de la indemnización que deba reconocerse por los bienes expropiados de acuerdo con el inciso anterior, el pago podrá hacerse a plazos, los cuales no excederán en conjunto de veinte años.

Se podrá nacionalizar, sin indemnización, las entidades que hayan sido creadas con fondos públicos.

Se prohíbe la confiscación, ya sea como pena o en cualquier otro concepto. Las autoridades que contravengan este precepto responderán en todo tiempo con sus personas y bienes del daño inferido. Los bienes confiscados son imprescriptibles.

15. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HAITI (25 DE MAYO DE 1964)

Artículo 22. Se garantiza a los ciudadanos el derecho de propiedad. La expropiación por causa de utilidad pública legalmente comprobada, sólo podrá realizarse mediante el pago o la consignación de quien a ello tenga derecho, de una justa y previa indemnización. Pero la propiedad entraña igualmente obligaciones. Su uso debe ser en el interés general.

El propietario rural tiene, con respecto a la comunidad, el deber de cultivar y explotar el suelo y protegerlo, especialmente contra la erosión.

La exención de esta obligación será prevista por la ley.

El derecho de propiedad no se extiende a las fuentes, ríos y otras corrientes de agua, ni a las minas y canteras que forman parte del dominio público del Estado.

La ley fijará las normas que regulan la libertad de investigación y explotación de las minas y canteras, asegurando al propietario de la superficie, al Estado o a sus concesionarios una participación igual a los beneficios de la explotación.

La ley limitará la altura máxima del derecho de propiedad.

Artículo 159. El régimen económico deberá responder esencialmente a principios de Justicia Social que tiendan a asegurar a todos los miembros de la comunidad una existencia digna del ser humano.

Artículo 160. Se garantizará la libertad económica, mientras no se oponga al interés social.

El Estado desarrollará y protegerá la empresa privada en las condiciones necesarias para el aumento de la riqueza nacional, de forma que asegure la participación del mayor número en los beneficios de esta riqueza.

Artículo 161. Ninguna corporación ni fundación, cualquiera que sea su denominación u objeto, podrá conservar en propiedad o administración inmuebles distintos a los destinados directa e inmediatamente a su uso o a los fines de su constitución.

Artículo 162. La ley podrá conceder privilegios durante un período limitado a los inventores o perfeccionadores. Podrán establecerse monopolios a favor del Estado o de las Comunas si el interés general lo exigiere.

Artículo 163. El Estado podrá administrar las empresas que presten servicios esenciales a la Comunidad, con el fin de asegurar su continuidad, si sus propietarios o concesionarios se negasen a respetar las normas legales relativas a la organización económica y social del país.

Podrá también tomar bajo su control, e incluso nacionalizar, los bienes de los ciudadanos de países con los que Haití esté en guerra.

Artículo 164. La construcción de viviendas se declara de interés social.

El Estado procurará conseguir que el mayor número posible de familias haitianas se conviertan en propietarias de su vivienda. Procurará igualmente que todas las empresas agrícolas e industriales aseguren a sus trabajadores y obreros vivienda cómoda e higiénica.

Artículo 165. Se hará figurar obligatoriamente en todas las concesiones otorgadas por el Estado para la instalación de muelles, ferrocarriles, canales y otras obras de Servicio Público, la cláusula de que, después de un plazo que no podrá exceder de cincuenta años, estas obras revertirán necesariamente al Estado en perfectas condiciones de uso y sin pago de indemnización alguna.

16. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (VOTADA Y PROCLAMADA POR LA ASAMBLEA NACIONAL, EN FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 1966)

12. La libertad de empresa, comercio e industria.— Sólo podrán establecerse monopolios en provecho del Estado o de instituciones estatales. La creación y organización de esos monopolios se harán por ley.

13. El derecho de propiedad. En consecuencia, nadie puede ser privado de ellas sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor determinado por sentencia de Tribunal competente. En casos de calamidad pública, la indemnización podrá no ser previa. No podrá imponerse la pena de confiscación general de bienes por razones de orden político.

a) Se declara de interés social la dedicación de la tierra a fines útiles y la eliminación gradual del latifundio. Se destinan a los planes de la Reforma Agraria las tierras que pertenezcan al Estado o las que éste adquiera de grado a grado o por expropiación, en la forma prescrita por esta Constitución, que no estén destinadas o deban destinarse por el Estado a otros fines de interés general. Se declara igualmente como un objetivo principal de la política social del Estado el estímulo y cooperación para integrar efectivamente a la vida nacional la población campesina, mediante la renovación de los métodos de la producción agrícola y la capacidad cultural y tecnológica del hombre campesino.

b) El Estado podrá convertir sus empresas en propiedades de cooperación o economía cooperativista.

17. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (1967)

Artículo 47. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada mientras cumpla con su función social natural. La ley deberá regular su adquisición, uso, goce y disposición, y deberá facilitar el acceso de todos a la propiedad.

Artículo 48. La confiscación de la propiedad está prohibida, si ésta se lleva a cabo no causará limitación o modificación en el derecho de la parte injuriada, y originará una acción sumaria por daños en contra de la autoridad que ha ordenado la confiscación y en contra del Estado.

Multas, obligaciones y sanciones que afecten el dominio de la propiedad personal deben ser regidas por ley.

Artículo 49. Nadie puede ser privado de sus derechos de propiedad, excepto en virtud de orden judicial o de expropiación, legalmente llevada a cabo, por razones de utilidad pública o interés social.

Sólo el Estado y otras instituciones de derecho público pueden ordenar expropiación por razones de utilidad pública o interés social, reconociendo una indemnización justa, excepto en los casos en los cuales la ley no provee dicha indemnización.

Artículo 50. Sólo las autoridades, autorizadas por la ley, podrán emitir órdenes que obstruyan o interfieran con la libertad de contratar para transferir o transmitir la propiedad; cualquier orden a este respecto que provenga de otra autoridad no tendrá efectos y no deberá ser obedecida.

Artículo 51. Es deber del Estado corregir los defectos de la estructura agraria en orden de llevar a cabo una justa distribución de la tierra, la más efectiva utilización del suelo, la expansión de la economía nacional, y el mejoramiento de las condiciones de vida del campesinado.

Con este fin, deberá promover y llevar a cabo planes de reforma agraria, los cuales deben estar en armonía con el interés de la justicia social y con el desarrollo económico y social del país, y deberá eliminar las formas precarias de tenencia de la tierra.

El dueño de la propiedad agrícola está obligado a explotarla racionalmente y asume responsabilidad por ello, debiendo supervisar personalmente su explotación.

El límite máximo y mínimo de las áreas de la propiedad agrícola deben ser determinadas por ley.

18. LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE PANAMA (PROMULGADA EL 11 DE OCTUBRE DE 1972)

Artículo 42. Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social cuando en ellas así se exprese. En materia criminal la ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aun cuando hubiese sentencia ejecutoriada.

Artículo 43. Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la ley por personas jurídicas o naturales.

Artículo 44. La propiedad privada implica obligaciones para su dueño por razón de la función social que debe llenar.

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos en la ley, puede haber expropiación mediante juicio especial e indemnización.

Artículo 45. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o de interés social, resultaren en conflicto los derechos de

particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

Artículo 46. En caso de guerra, de grave perturbación del orden público o de interés social urgente, que exijan medidas rápidas, el Ejecutivo puede decretar la expropiación u ocupación de la propiedad privada.

Cuando fuese factible la devolución del objeto ocupado, la ocupación será sólo por el tiempo que duren las circunstancias que las hubieren causado.

El Estado es siempre responsable por toda expropiación que así lleve a cabo el Ejecutivo y por los daños y perjuicios causados por la ocupación, y pagará su valor cuando haya cesado el motivo determinante de la expropiación u ocupación.

Artículo 227. Pertenecen al Estado y son de uso público y, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada:

1. El mar territorial y las aguas lacustres y fluviales; las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y esteros. Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que establezca la ley;
2. Las tierras y las aguas destinadas a servicios públicos y a toda clase de comunicaciones;
3. Las tierras y las aguas destinadas o que el Estado destine a servicios públicos de irrigación, de producción hidroeléctrica, de desagüe y de acueductos;
4. El espacio aéreo, la plataforma continental submarina, el lecho y el subsuelo del mar territorial, y
5. Los demás bienes que la ley defina como de uso público.

En todos los casos en que los bienes de propiedad privada se conviertan por disposición legal en bienes de uso público, el dueño de ellos será indemnizado.

Artículo 228. Las concesiones para la explotación del suelo, del subsuelo, de los bosques y para la utilización de agua, de medios de comunicación o transporte y de otras empresas de servicio público, se inspirarán en el bienestar social y el interés público.

Bienes y Derechos del Estado

Artículo 226. Pertenecen al Estado:

1. Los bienes existentes en el territorio que pertenecieron a la República de Colombia;

2. Los derechos y acciones que la República de Colombia poseyó como dueña, dentro o fuera del país, por razón de la soberanía que ejerció sobre el territorio del Istmo de Panamá;
3. Los bienes, rentas, fincas, valores, derechos y acciones que pertenecieron al extinguido Departamento de Panamá;
4. Las tierras baldías e indultadas;
5. Las riquezas del subsuelo, que podrán ser explotadas por empresas estatales o mixtas o ser objeto de concesiones o contratos para su explotación según lo establece la ley;

Los derechos mineros otorgados y no ejercidos dentro del término y condiciones que fije la ley, revertirán al Estado;

6. Las salinas, las minas, las aguas subterráneas y termales, depósitos de hidrocarburos, las canteras y los yacimientos de toda clase que no podrán ser objeto de apropiación privada, pero podrán ser explotados directamente por el Estado, mediante empresas estatales o mixtas, o ser objeto de concesión u otros contratos para su explotación, por empresas privadas. La ley reglamentará todo lo concerniente a las distintas formas de explotación señaladas en este ordinal;
7. Los monumentos históricos, documentos y otros bienes que son testimonio del pasado de la nación. La ley señalará el procedimiento por medio del cual revertirán al Estado tales bienes cuando se encuentren bajo la tenencia de particulares por cualquier título, y
8. Los sitios y objetos arqueológicos, cuya explotación, estudio y rescate serán regulados por la ley.

19. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE CUBA (1975)

Artículo 14. En la República de Cuba rige el sistema socialista de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios de producción y en la supresión de la explotación del hombre por el hombre.

Artículo 15. La propiedad estatal socialista, que es la propiedad de todo el pueblo, se establece irreversiblemente sobre las tierras que no pertenecen a los agricultores pequeños o cooperativas integradas por los mismos; sobre el subsuelo, las minas, los recursos marítimos naturales y vivos dentro de la zona de su soberanía, los bosques, las aguas, las vías de comunicación; sobre los centrales azucareros, las fábricas, los medios fundamentales de transporte, y cuan-

tas empresas, bancos, instalaciones y bienes han sido nacionalizados y expropiados a los imperialistas, latifundistas y burgueses, así como sobre las granjas del pueblo, fábricas, empresas e instalaciones económicas, sociales, culturales y deportivas construidas, fomentadas o adquiridas por el Estado y las que en el futuro construya, fomente o adquiera.

Artículo 16. El Estado organiza, dirige y controla la actividad económica nacional de acuerdo con el Plan Unico de Desarrollo Económico-Social, en cuya elaboración y ejecución participan activa y conscientemente los trabajadores de todas las ramas de la economía y de las demás esferas de la vida social.

El desarrollo de la economía sirve a los fines de fortalecer el sistema socialista, satisfacer cada vez mejor las necesidades materiales y culturales de la sociedad y los ciudadanos, promover el desenvolvimiento de la personalidad humana y de su dignidad, el avance y la seguridad del país y de la capacidad nacional para cumplir los deberes internacionalistas de nuestro pueblo.

Artículo 17. Para la administración de la propiedad socialista de todo el pueblo, el Estado organiza empresas y otras entidades económicas.

La estructura, atribuciones y funciones de las empresas y entidades económicas estatales de producción y servicios y el régimen de sus relaciones son regulados por la ley.

Artículo 18. El comercio exterior es función exclusiva del Estado. La ley determina las instituciones y autoridades estatales facultadas para crear empresas de comercio exterior y para normar y regular las operaciones de exportación e importación, así como las investidas de personalidad jurídica para concertar convenios comerciales.

Artículo 19. En la República de Cuba rige el principio socialista "de cada cual según su capacidad; a cada cual según su trabajo".

Artículo 20. El Estado reconoce la propiedad de los agricultores pequeños sobre sus tierras y otros medios e instrumentos de producción, conforme a lo que establece la ley.

Los agricultores pequeños tienen derecho a asociarse entre sí, en la forma y con los requisitos que establece la ley, tanto a los fines de la producción agropecuaria como a los de la obtención de créditos y servicios estatales.

Se autoriza la organización de cooperativas agropecuarias en los casos y en la forma que la ley establece. La propiedad cooperativa es una forma de propiedad colectiva de los campesinos integrados en ellas.

El Estado apoya la producción cooperativa de los pequeños agricultores, así como la producción individual, que contribuyan al auge de la economía nacional.

El Estado promueve la incorporación de los agricultores pequeños, voluntaria y libremente aceptada por éstos, a los planes y unidades estatales de producción agropecuaria.

Artículo 21. El agricultor pequeño tiene derecho a vender la tierra previa autorización de los organismos determinados por la ley. En todo caso, el Estado tiene derecho preferente a la adquisición mediante el pago de su justo precio.

Se prohíbe el arrendamiento, la aparcería, los préstamos hipotecarios y cualquier otra forma que implique gravamen o cesión parcial a particulares de los derechos y acciones emanados de la propiedad de los agricultores pequeños sobre las fincas rústicas.

Artículo 22. Se garantiza la propiedad personal sobre los ingresos y ahorros procedentes del trabajo propio, sobre la vivienda que se posea con justo título de dominio y los demás bienes y objetos que sirven para la satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la persona.

Asimismo, se garantiza la propiedad sobre medios e instrumentos de trabajo personal o familiar que no se emplean para explotar el trabajo ajeno.

Artículo 23. El Estado reconoce la propiedad de las organizaciones políticas, sociales y de masas sobre bienes destinados al cumplimiento de sus fines.

Artículo 24. La ley regula el derecho de herencia sobre la vivienda de dominio propio y demás bienes de propiedad personal.

La tierra de los agricultores pequeños sólo es heredable por aquellos herederos que la trabajan personalmente, salvo las excepciones que establece la ley.

En relación con los bienes integrados en cooperativas, la ley fija las condiciones en que son heredables.

Artículo 25. Se autoriza la expropiación de bienes, por razones de utilidad pública o interés social y con la debida indemnización.

La ley establece el procedimiento para la expropiación y las bases para determinar su utilidad y necesidad, así como la forma de la indemnización, considerando los intereses y las necesidades económicas y sociales del expropiado.

Artículo 27. Para asegurar el bienestar de los ciudadanos, el Estado y la sociedad protegen la naturaleza. Incumbe a los órganos competentes y además a cada ciudadano, velar porque sean mantenidas limpias las aguas y la atmósfera, y que se proteja el suelo, la flora y la fauna.

b) *Constituciones de Europa*

1.	URSS	1936
2.	España	1945 y 1958
3.	Italia	1947
4.	Checoslovaquia	1948
5.	Alemania (República Federal)	1949
6.	Hungría	1949
7.	Polonia	1949
8.	Francia	1958 (anexo el preámbulo de 1946)
9.	Yugoslavia	1963
10.	Rumania	1965
11.	Alemania (República Democrática)	1968
12.	Albania	1968
13.	Bulgaria	1971
14.	Grecia	1975

1. CONSTITUCION DE LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS (PROMULGADA EL 5 DE DICIEMBRE DE 1936)

Artículo 4. [*Base económica*]

La base económica de la URSS la constituye el sistema socialista de la economía y la propiedad socialista de los instrumentos y medios de producción, firmemente establecidos como resultado de la liquidación del sistema económico capitalista, de la abolición de la propiedad privada de los instrumentos y medios de producción y de la supresión de la explotación del hombre por el hombre.

Artículo 5. [*Formas de propiedad socialista*]

La propiedad socialista en la URSS reviste bien la forma de propiedad del Estado (patrimonio de la totalidad del pueblo), bien la forma de propiedad cooperativa y de granja colectiva (propiedad de granjas colectivas o propiedad de las asociaciones cooperativas).

Artículo 6. [*Propiedad del Estado*]

La tierra, el subsuelo, las aguas, los bosques, los talleres, las fábricas, las minas de carbón y de mineral, los ferrocarriles, los transportes por agua y por aire, los Bancos, los medios de comunicación, las grandes empresas agrícolas organizadas por el Estado (granjas del Estado, estaciones de máquinas y tractores, etc.), así como las empresas municipales y la parte fundamental de las casas de habitación en las ciudades y en los centros industriales, son propiedad del Estado, es decir, patrimonio del pueblo en su conjunto.

Artículo 7. [*Propiedades de granjas colectivas y organizaciones cooperativas*]

Las Empresas comunes de las granjas colectivas y las organizaciones cooperativas, con su inventario de bienes muebles e inmuebles, la producción obtenida por las granjas colectivas y por las organizaciones cooperativas, así como los edificios comunes, constituyen la propiedad común, socialista, de las granjas colectivas y de las organizaciones cooperativas.

Cada hogar de una granja colectiva, además del ingreso básico obtenido de la economía de la granja colectiva, disfruta personalmente, conforme a los estatutos de las cooperativas agrícolas (arteles), de un pequeño terreno contiguo a la casa y sobre él posee, como propiedad personal, una economía doméstica auxiliar, una casa habitación, ganado productivo, aves de corral y pequeños aperos de labranza.

Artículo 8. [*Tierra de las granjas colectivas*]

La tierra ocupada por las granjas colectivas es dada en disfrute gratuito por tiempo ilimitado, es decir, a perpetuidad.

Artículo 9. [*Economías privadas*]

Junto al sistema socialista de economía, que es la forma dominante en la URSS, la ley admite pequeñas economías privadas de campesinos y artesanos individuales, basadas en el trabajo personal y excluyendo la explotación del trabajo ajeno.

Artículo 10. [*Propiedad personal*]

Están protegidos por la ley el derecho de los ciudadanos a la propiedad personal de los ingresos y ahorros, provenientes de su trabajo; de la casa habitación y de la economía doméstica auxiliar; de los objetos de economía y uso domésticos y de los objetos de consumo y uso personales, lo mismo que el derecho de herencia de la propiedad personal de los ciudadanos.

Artículo 11. [*Planificación económica estatal*]

La vida económica de la URSS está determinada y dirigida por el Plan del Estado de la Economía Nacional, en interés del aumento de la riqueza social, de la elevación continua del nivel económico y social de los trabajadores, del afianzamiento de la independencia de la URSS y del fortalecimiento de su capacidad defensiva.

2. ESPAÑA: LEY FUNDAMENTAL

Fuero de los españoles (Ley 17 de julio, 1945, aprobándose con el carácter de ley fundamental reguladora de los derechos y deberes de los españoles y amparadora de su garantía).

Artículo 30. La propiedad privada como medio natural para el cumplimiento de los fines individuales, familiares y sociales, es reconocida y amparada por el Estado.

Todas las formas de la propiedad quedan subordinadas a las necesidades de la nación y al bien común.

La riqueza no podrá permanecer inactiva, ser destruida indebidamente ni aplicada a fines ilícitos.

Artículo 31. El Estado facilitará a todos los españoles el acceso a las formas de propiedad más íntimamente ligadas a la persona humana; hogar familiar, heredad, útiles de trabajo y bienes de uso cotidiano.

Artículo 32. En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes.

Nadie podrá ser expropiado sino por causa de utilidad pública o interés social, previa la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes.

Movimiento nacional (Principios fundamentales). Ley de 17 de mayo, 1958, promulgándolos. Dándoles carácter de "permanentes e inalterables", y disponiendo que "el juramento que se exige para ser investido de cargos públicos habrá de referirse al texto de los mismos".

Punto X. Se reconoce al trabajo como origen de jerarquía, deber y honor de los españoles y a la propiedad privada, en todas sus formas, como derecho condicionado a su función social. La iniciativa privada, fundamento de la actividad económica, deberá ser estimulada, encauzada y, en su caso, suplida por la acción del Estado.

3. CONSTITUCION ITALIANA (PROMULGADA EL 31 DE ENERO DE 1947)

Artículo 41. [*Libertad y control económicos*]

La iniciativa económica privada es libre.

No puede desarrollarse contrariamente a la utilidad social o de manera que atente a la seguridad, a la libertad, a la dignidad humanas.

La ley determina los programas y los controles pertinentes a fin de que la actividad económica, pública y privada, pueda ser dirigida y coordinada a los fines sociales.

Artículo 42. [*Propiedad privada*]

La propiedad es pública o privada. Los bienes económicos pertenecen al Estado, a las personas morales o a los individuos.

La propiedad privada está reconocida y garantizada por la ley que determina los modos de adquisición, de goce, así como sus limitaciones, al objeto de asegurar su *función social* y de hacerla accesible a todos.

La propiedad privada pueda ser, en los casos previstos por la ley, y previa indemnización, expropiada por motivos de interés general.

La ley establece las normas y los límites de la sucesión legítima y testamentaria y los derechos del Estado sobre la herencia.

Artículo 43. [*Socialización*]

A los fines de utilidad general, la ley puede reservar originariamente o transferir, mediante expropiación y salvo indemnización, al Estado, a entidades públicas o a comunidades de trabajadores o de usuarios, determinadas empresas o categorías de empresas que se refieran a servicios públicos esenciales o a fuentes de energía o a situaciones monopolísticas y que tengan un carácter de interés general prominente.

Artículo 44. [*Limitación de la propiedad territorial*]

A fin de conseguir la explotación racional del suelo y de establecer relaciones sociales equitativas, la ley impone obligaciones y limitaciones a la propiedad territorial privada, fija límites a su extensión según las regiones y las zonas agrícolas, promueve e impone la mejora de las tierras, la transformación del latifundio y la reconstitución de unidades productivas, ayuda a la propiedad media y pequeña.

La ley dispone medidas a favor de las zonas montañosas.

4. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE CHECOSLOVAQUIA
(PROMULGADA EL 9 DE JUNIO DE 1948)

Artículo XII. [*Sistema económico*]

El sistema económico de la República checoslovaca se funda sobre:

- La nacionalización de las riquezas minerales, de la industria, del comercio al por mayor y de las finanzas;
- La propiedad de la tierra según el principio "la tierra pertenece al que la trabaja";

— La protección de las empresas medias y pequeñas y la inviolabilidad de los bienes personales.

Toda la economía nacional checoslovaca debe servir al pueblo. Para tal interés público el Estado dirige toda la actividad económica con arreglo a un plan económico único.

5. LEY FUNDAMENTAL DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
(PROMULGADA EL 23 DE MAYO DE 1949)

Artículo 14. [*Propiedad, derecho hereditario y expropiación*]

1. Se garantizan la propiedad y el derecho hereditario. Su contenido y límites serán fijados por la ley.

2. La propiedad obliga. Su uso debe servir al mismo tiempo al bien de la generalidad.

3. La expropiación sólo es lícita para el bien de la comunidad. Sólo puede llevarse a cabo por una ley o en virtud de una ley, que regule el modo y medida de la indemnización. La indemnización se determinará teniendo en cuenta una justa ponderación de los intereses de la generalidad y los del interesado. En caso de disputa sobre el monto de la indemnización, queda abierta la vía judicial ordinaria.

Artículo 15. [*Socialización*]

A fines de socialización, el suelo y la tierra, los recursos naturales y los medios de producción, pueden, por medio de una ley que regule el modo y medida de la indemnización, ser transferidos a la propiedad común o a otras formas de economía comunitaria. Para la indemnización se aplicarán por analogía los párrafos 2 y 3 del artículo 14.

6. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA POPULAR DE HUNGRIA
(20 DE AGOSTO DE 1949)

Documentation Française, Nº 3.453 (9-1-1968)

Traducción

CAPÍTULO II

El orden social

Artículo 4º

1. En la República Popular de Hungría, la gran mayoría de los medios de producción son de propiedad social y están depositados en manos del Estado,

de las instituciones públicas o de las cooperativas. Los medios de producción pueden también hallarse en propiedad privada.

2. En la República Popular de Hungría, el poder de Estado del pueblo ejerce la dirección de la economía nacional. Los trabajadores eliminan progresivamente los elementos capitalistas y establecen sistemáticamente un orden económico socialista.

Artículo 5º

La vida económica de la República Popular de Hungría está determinada por un plan de economía nacional definida por el Estado. Reposando sobre las empresas que son propiedad social, sobre el sistema bancario estatal, sobre las estaciones de máquinas agrícolas, el poder del Estado dirige y controla la economía nacional, en interés del constante desenvolvimiento de las fuerzas productivas, del bien público, del nivel de vida material y cultural de los trabajadores, y en el interés del reforzamiento de la defensa nacional.

Artículo 6º

Son bienes del pueblo entero, propiedades del Estado y de las Administraciones Públicas: las riquezas del subsuelo, los bosques, las aguas, las fuentes de energía natural, las minas, las empresas industriales importantes, los medios de comunicación (vías férreas, fluviales y aéreas), los bancos, el Correo, el Telégrafo, el Teléfono, la Radio, las empresas agrícolas organizadas por el Estado (las granjas del Estado, las estaciones de maquinarias, las instalaciones de riego, etc.).

Las empresas del Estado asumen el comercio exterior, así como dirigen toda la actividad comercial.

Artículo 7º

1. La República Popular de Hungría reconoce y garantiza a los ciudadanos trabajadores el derecho a la tierra y considera como un deber el promover el desarrollo socialista de la agricultura organizando las empresas agrícolas del Estado, de las maquinarias y ayudando a las cooperativas de producción que reposan sobre la unión voluntaria y el trabajo en común.

2. El Estado reconoce y apoya todo movimiento cooperativo genuino, verdadero, destinado a luchar contra la explotación.

Artículo 8º

1. La Constitución reconoce y protege la propiedad resultante del trabajo.

2. La propiedad privada y la iniciativa privada no pueden atentar contra los intereses de la colectividad.

3. La Constitución garantiza el derecho de sucesión.

Artículo 9º

1. El trabajo es el fundamento del orden social de la República de Hungría.

2. Todo ciudadano apto para trabajo, trabaja según sus capacidades y es un derecho y un deber de honor.

3. Los trabajadores contribuyen a la construcción del socialismo por su labor y participación en el trabajo, reforzando la disciplina y mejorando los métodos del trabajo.

4. La República Popular de Hungría se esfuerza en realizar el principio del socialismo: "a cada uno según sus capacidades, a cada uno según su trabajo".

7. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE POLONIA 1949.

Artículo 3º

La República Popular de Polonia:

... 3) Organizará una economía planificada en las bases de la constitución de la propiedad social.

Artículo 7

1. La República Popular de Polonia promueve, en las bases de la socialización de los medios de producción, comercio, transporte y crédito, la vida cultural y económica del país de acuerdo con el plan de economía nacional y, en particular, a través de la expansión del Estado socialista industrial, el cual es un factor decisivo en la transformación de las relaciones sociales y económicas.

2. El Estado tiene el monopolio del comercio exterior.

3. La principal intención de la política económica planificada de la República Popular de Polonia es el constante desarrollo de las fuerzas productivas del país, la continua elevación del standard de vida del pueblo trabajador y el reforzamiento del poder, capacidad de defensa e independencia de la tierra natal.

Artículo 8º

La riqueza nacional, constituida por los depósitos minerales, las aguas, los bosques del Estado, minas, caminos, ferrocarriles, transportes por aire y agua, medios de comunicación, bancos, establecimientos industriales estatales, granjas estatales, estaciones de maquinarias estatales, empresas comerciales del Estado y empresas comunales y sus utilidades, todo ello está sujeto a un cuidado especial y a la protección del Estado y de los ciudadanos.

Artículo 11

La República Popular de Polonia promueve el desarrollo de varias formas del movimiento cooperativo en las ciudades y en el campo, y le concede ayuda especial en el logro de sus tareas, un cuidado especial y protección a la propiedad cooperativa que constituye la propiedad social.

Artículo 12

La República Popular de Polonia reconoce y protege, sobre la base de las leyes existentes, la propiedad individual y el derecho de heredar la tierra, los inmuebles y otros medios de producción pertenecientes a los campesinos, artesanos y trabajadores del hogar.

Artículo 13

La República Popular de Polonia garantiza a los ciudadanos la completa protección de la propiedad personal y el derecho a heredar dicha propiedad.

8. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA FRANCESA (PROMULGADA EL 5 DE OCTUBRE DE 1958)

Preámbulo

El pueblo francés proclama solemnemente su adhesión a los Derechos del Hombre y a los principios de la soberanía nacional, tal como fueron definidos por la Declaración de 1789, confirmada y completada por el Preámbulo de la Constitución de 1946.

En virtud de estos principios y del de la libre determinación de los pueblos, la República ofrece a los Territorios de Ultramar, que manifiesten la voluntad de adherirse a ella, nuevas instituciones fundadas en el ideal común de libertad, igualdad y fraternidad y concebidas con miras a su evolución democrática.

Artículo 34. [*Materia legislativa*]

La ley es votada por el Parlamento.

La ley fija las reglas concernientes a:

- Los derechos civiles y a las garantías fundamentales concedidas a los ciudadanos para el ejercicio de las libertades públicas; las obligaciones impuestas por la Defensa Nacional en sus personas y en sus bienes;
- La nacionalidad, estado y capacidad de las personas, los regímenes matrimoniales, las sucesiones y donaciones;
- La determinación de los crímenes y delitos, así como de las penas aplicables, el procedimiento penal, la amnistía; la creación de nuevos órdenes de jurisdicción y el estatuto de los magistrados;
- La base, tasa y las modalidades de recaudación de impuestos de toda naturaleza; el sistema de emisión de moneda.

La ley determina igualmente las reglas concernientes a:

- El régimen electoral de las Asambleas parlamentarias y de las Asambleas locales;
- La creación de categorías de establecimientos públicos;
- Las garantías fundamentales concedidas a los funcionarios civiles y militares del Estado;
- Las nacionalizaciones de las empresas y las transferencias de propiedades de empresas del sector público al sector privado.

La ley determina los principios fundamentales:

- De la organización general de la Defensa Nacional;
- De la libre administración de las colectividades locales, de sus competencias y de sus recursos;
- De la enseñanza;
- Del régimen de propiedad, de los derechos reales y de las obligaciones civiles y comerciales;
- Del derecho del trabajo, del derecho sindical y de la seguridad social.

Las leyes financieras determinan los recursos y las cargas del Estado en las condiciones y con las reservas previstas por la ley.

Las leyes de programa determinan los objetivos de la acción económica y social del Estado.

Las disposiciones del presente artículo podrán ser precisadas y complementadas por una ley orgánica.

*Preámbulo de la Constitución de la República francesa,
de 27 de octubre de 1946*

A continuación inmediata de la victoria alcanzada por los pueblos libres sobre los regímenes que han intentado reducir a servidumbre y degradar a la persona humana, el pueblo francés proclama de nuevo que todo ser humano sin distinción de raza, de religión ni de creencia, posee derechos inalienables y sagrados. Reafirma solemnemente los Derechos y las Libertades del Hombre y del Ciudadano, consagrados por la Declaración de Derechos de 1789 y los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República.

Proclama, además, como especialmente necesarios a nuestro tiempo, los principios políticos y sociales siguientes:

La ley garantiza a la mujer, en todos los dominios, derechos iguales a los del hombre.

Todo hombre perseguido en razón de su actividad en favor de la libertad tiene derecho de asilo en los territorios de la República.

Cualquier persona tiene el deber de trabajar y el derecho de tener un empleo. Nadie puede ser perjudicado en su trabajo o en su empleo, en razón de sus orígenes, de sus opiniones o de sus creencias.

Todo hombre puede defender sus derechos y sus intereses por la acción sindical y adherirse al sindicato de su elección.

El derecho a la huelga se ejerce en el cuadro de las leyes que lo reglamentan.

Todo trabajador participa, por intermedio de sus delegados, en la determinación colectiva de las condiciones de trabajo, así como en la gestión de las empresas.

Todo bien, toda empresa, cuya explotación adquiera los caracteres de un servicio público nacional o de un monopolio de hecho, debe convertirse en propiedad de la colectividad.

La nación asegura al individuo y a la familia las condiciones necesarias para su desenvolvimiento.

Garantiza a todos, especialmente al niño, a la madre y a los trabajadores ancianos, la protección de la salud, la seguridad material, el reposo y esparci-

miento. Todo ser humano que en razón de su edad, de su estado físico o mental, de la situación económica, se encuentre en la incapacidad de trabajar, tiene el derecho a obtener de la colectividad los medios apropiados de existencia.

La nación proclama la solidaridad y la igualdad de todos los franceses ante las cargas resultantes de las calamidades nacionales.

La nación garantiza el igual acceso del niño y del adulto a la instrucción, a la formación profesional y a la cultura. Es un deber del Estado la organización de la enseñanza pública, gratuita y laica en todos los grados.

La República francesa, fiel a sus tradiciones, se adapta a las reglas del Derecho Público Internacional. No emprenderá guerra alguna con fines de conquista y jamás empleará sus fuerzas contra la libertad de ningún pueblo.

Bajo reserva de reciprocidad, Francia consiente en las limitaciones de soberanía necesarias para la organización y la defensa de la paz.

Francia forma con los Pueblos de Ultramar una unión fundada sobre la igualdad de derechos y de deberes, sin distinción de raza ni de religión.

La Unión francesa se compone de naciones y de pueblos que ponen en común o coordinan sus recursos y sus esfuerzos para desenvolver sus civilizaciones respectivas, acrecer su bienestar y garantizar su seguridad.

Fiel a su misión tradicional, Francia tratará de conducir los pueblos que ha tomado a su cargo a la libertad de administrarse por sí mismos y de regir democráticamente sus propios asuntos; descartando todo sistema de colonización fundado sobre la arbitrariedad, garantiza a todos igual acceso a las funciones públicas y al ejercicio individual o colectivo de los derechos y libertades proclamados o confirmados más arriba.

9. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DE YUGOSLAVIA (9 DE ENERO DE 1963)

CAPÍTULO II

Artículo 6. El fundamento del sistema social-económico de Yugoslavia reside en el libre trabajo asociado que se realiza con los medios de producción de propiedad social y en la gestión de los trabajadores en la producción y distribución del producto social dentro de la organización de trabajo y la comunidad social.

Artículo 7. El trabajo y los resultados del trabajo son los únicos que determinan la situación material y social del hombre.

Nadie puede adquirir directa o indirectamente beneficios materiales u otros explotando el trabajo ajeno.

Artículo 8. Los medios de producción y otros medios del trabajo social, como también las riquezas del subsuelo y otras riquezas naturales, constituyen bienes sociales.

La ley establece las modalidades de cómo se puede disponer de diferentes medios de producción y de otros bienes sociales, como establece también los derechos relativos al empleo de dichos medios y bienes, con arreglo a su naturaleza y objetivos.

Artículo 9. La gestión en la organización de trabajo comprende especialmente el derecho y la obligación de los trabajadores a:

1. Administrar la organización de trabajo, directamente o a través de los órganos de gestión, elegidos por ellos mismos;
2. Organizar la producción y otras actividades, velar por el desarrollo de la organización del trabajo y elaborar planes y programas de trabajo y de desarrollo;
3. Decidir sobre el intercambio de productos y servicios y sobre otras cuestiones relativas a las actividades económicas de la organización del trabajo;
4. Decidir sobre el empleo de los recursos sociales y su distribución y emplearlos económicamente, a fin de lograr el máximo efecto en beneficio de la organización de trabajo y de la sociedad;
5. Distribuir los ingresos de la organización de trabajo y asegurar el desarrollo de la base material de sus actividades; distribuir los ingresos entre los trabajadores; cumplir con las obligaciones de la organización de trabajo con respecto a la sociedad;
6. Decidir sobre la admisión de trabajadores en la organización de trabajo, la cesación del trabajo y otras relaciones laborales; fijar la jornada de trabajo en la organización de trabajo con arreglo a las condiciones laborales generales; tratar otros asuntos de interés común; velar por el control interno y el carácter público de sus actividades
7. Regular y fomentar las condiciones de su trabajo; organizar la protección en el trabajo y el descanso; asegurar las condiciones para su educación y para elevar el nivel de vida individual y colectivo;
8. Resolver si una parte de la organización de trabajo debe formar una entidad por separado y sobre la fusión y la asociación con otras organizaciones de trabajo.

Practicando el autogobierno, los trabajadores en las comunidades social-políticas resuelven sobre la dirección del desarrollo económico y social, sobre la distribución del producto social y sobre otros asuntos de interés común.

En la administración de la organización de trabajo, cuando se trate de asuntos de un particular interés social, podrán participar también ciudadanos interesados y representantes de las organizaciones interesadas y los de la sociedad.

Con el objetivo de asegurar una situación social-económica igual para los trabajadores, la ley y el estatuto fijan los derechos de gestión de trabajadores empleados en los órganos estatales y organizaciones y asociaciones social-políticas, con arreglo a la naturaleza de las actividades desplegadas por tales órganos y organizaciones. Los trabajadores realizan la gestión dentro de un sistema social-económico único en virtud de la Constitución, las leyes y los estatutos, y responden de su trabajo.

Es anticonstitucional todo acto que viole el derecho de los trabajadores a la gestión.

Artículo 10. Los trabajadores empleados en una organización de trabajo establecen, en calidad de miembros de la comunidad de trabajo, relaciones laborales mutuas y gozan de iguales derechos en la gestión.

La organización de trabajo y la gestión en la organización de trabajo deben facilitar —a todos los niveles y en todas las fases del proceso de trabajo que constituye un conjunto único— que los trabajadores resuelvan lo más directamente posible sobre las cuestiones inherentes al trabajo, sobre la regulación de las relaciones mutuas, la distribución de ingresos y otras cuestiones relativas a su situación económica, procurando al propio tiempo las más favorables condiciones para el trabajo y las actividades económicas de la organización de trabajo en su conjunto.

Artículo 11. El producto del trabajo social realizado en las organizaciones de trabajo —base de la reproducción social y de la satisfacción de las necesidades sociales y de las necesidades individuales y colectivas de los trabajadores— se distribuye dentro de los marcos de un sistema único de distribución y con arreglo a las condiciones y criterios únicos que garantizan la reproducción social, la distribución según el trabajo y el autogobierno social.

La organización de trabajo —una vez haya asegurado los recursos asignados a restituir el valor de los recursos gastados en el trabajo y designando una parte del valor realizado de los productos, a fin de igualar las condiciones de trabajo y de adquirir ingresos— distribuye los ingresos que le pertenecen, entre la parte que sirve para ampliar las bases materiales del trabajo y la que se emplea para satisfacer las necesidades individuales y colectivas de los trabajadores.

A la organización de trabajo se le asegura, para que pueda ampliar las bases materiales de su trabajo, una parte del valor realizado de los productos, proporcional a lo que hubiere participado en la creación de los medios de reproducción social, mientras en las actividades extraeconómicas se efectúa con arreglo a las tareas encomendadas a la organización de trabajo y según las necesidades sociales. Para satisfacer las necesidades individuales y colectivas de los trabajadores, a la organización de trabajo le pertenece una parte del valor realizado de los productos en proporción con la productividad del trabajo de sus trabajadores y con arreglo al éxito económico logrado, mientras en las actividades extraeconómicas se toman en consideración los resultados logrados en cuanto a la satisfacción de las necesidades sociales.

Los recursos de la organización de trabajo, asignados para reconstruir y ampliar las bases materiales del trabajo y siendo recursos comunes para la reproducción social, sirven para ampliar las bases materiales de la organización de trabajo y de la colectividad en su conjunto.

La organización de trabajo dispone de esos recursos en virtud de los principios únicos que rigen en lo que se refiere al empleo de los recursos asignados para la reproducción social, establecidos por la ley federal, y con arreglo a las condiciones y criterios establecidos en virtud de las prescripciones que facilitan coordinar el desarrollo económico y realizar otras relaciones previstas en los planes económicos sociales.

A fin de que pueda ampliar las bases materiales de su trabajo, a la organización de trabajo se le facilitan —además de los recursos creados por su trabajo propio— otros recursos sociales, en la igualdad de condiciones y con arreglo a los criterios únicos del sistema crediticio.

Artículo 12. A todo trabajador de la organización de trabajo le pertenece, en virtud del principio de la distribución según el trabajo, un ingreso individual dependiente de su propio trabajo y del trabajo de la unidad y de la organización de trabajo en su totalidad.

Artículo 13. Una organización de trabajo puede ser fundada, con arreglo a la ley, por comunidades social-políticas, organizaciones de trabajo y otras y ciudadanos.

Una organización de trabajo será fundada como empresa u otra clase de organización económica cuando se trate de actividades en la esfera de la economía o como institución u otra clase de organización cuando se trate de actividades en la esfera de educación, ciencia, cultura, sanidad, prevención social u otros servicios sociales.

Las organizaciones de trabajo ocupan una situación de igualdad, independientemente de quien fuere su fundador.

La ley puede prescribir las condiciones en las que podrán fusionarse las organizaciones de trabajo, como también las condiciones en que podrán independizarse o separarse sus partes diferentes.

Artículo 14. Los trabajadores que con su trabajo individual ejercen una libre actividad cultural, profesional u otra similar, ocupan, en principio, una misma situación social y tienen, en el fondo, iguales derechos y obligaciones que los trabajadores de las organizaciones de trabajo.

Los trabajadores que ejercen tales actividades podrán asociar su trabajo y formar comunidades de trabajo provisionales o permanentes que ocuparían, en el fondo, una misma situación que las organizaciones de trabajo y en las que los trabajadores tendrían, en lo general, iguales derechos y obligaciones que los trabajadores en las organizaciones de trabajo.

La ley establece las condiciones en las que dichos trabajadores y sus comunidades realizan sus derechos y cumplen con sus obligaciones, como también fija las condiciones en las que podrá utilizar los medios sociales y administrarlos con el objetivo de desarrollar sus actividades.

Artículo 15. La organización de trabajo es una entidad autónoma de la gestión.

La organización de trabajo tiene personalidad jurídica y potestad legal con respecto a los recursos de propiedad social administrados por ella. A la organización de trabajo no se le puede privar de estos derechos, como tampoco pueden ser restringidos, a menos que así lo requiera un interés general establecido por una ley federal y con arreglo a un procedimiento previsto en la misma ley y mediante una adecuada indemnización.

La organización de trabajo tiene la obligación de conservar el valor íntegro de los medios de producción administrados por ella.

La organización de trabajo responde de sus actividades con los medios sociales que administra.

Artículo 16. En virtud de la ley pueden ser establecidas las condiciones generales relativas al ejercicio de determinadas actividades por parte de diferentes organizaciones de trabajo que representan un particular interés social.

Sólo en virtud de una ley federal pueden ser dictadas las condiciones bajo las cuales se debe desarrollar el intercambio de productos y servicios en el comercio interior.

La ley federal establece las condiciones para el intercambio de productos y servicios y las condiciones para las actividades desarrolladas por las organizaciones de trabajo con respecto al extranjero.

Artículo 17. A fin de organizar y estimular el trabajo social y la colaboración con los trabajadores que trabajan con sus propios medios de producción en la agricultura y otros ramos económicos y a fin de ligar estas actividades con la economía social y de ampliar las relaciones sociales socialistas en estos sectores, se crean cooperativas como organizaciones de trabajo.

La afiliación a las cooperativas es voluntaria. La ley y los estatutos de la cooperativa o de otra organización de trabajo pueden establecer que los trabajadores que trabajan con sus propios instrumentos de trabajo y colaboran económicamente con una organización de trabajo de modo permanente, podrán tomar parte en la administración de esta organización de trabajo con respecto a los asuntos en torno a los cuales colaboran.

La ley puede prescribir las obligaciones en cuanto a la asociación de los trabajadores que trabajan con sus propios medios de producción o en cuanto a su colaboración con una organización de trabajo, a fin de efectuar trabajos de mejora, aprovechar mejor tierra de regadío, aprovechar aguas y efectuar defensa contra aguas, proteger las tierras contra la erosión y torrentes o cuando lo requiere un particular interés social en el dominio de la repoblación y la explotación forestales o fomento de la producción agrícola en determinados terrenos.

Artículo 18. La organización económica puede ser disuelta, bajo las condiciones y procedimientos fijados por la ley, si no fuere capaz de renovar los medios de producción y otros instrumentos de trabajo que suministra o si no fuere capaz de cumplir con otras obligaciones establecidas por la ley.

Una organización económica puede quedar provisionalmente sometida a la administración forzosa, con arreglo a las condiciones y procedimientos establecidos por la ley federal, si con sus actividades motivare perjuicios graves a los intereses sociales.

Una institución puede ser disuelta, bajo las condiciones y procedimientos establecidos por la ley si no reünere los requisitos previstos por la ley o si no reünere las condiciones establecidas para el ejercicio de sus actividades.

Artículo 19. A fin de efectuar una racional división del trabajo y de actividades relativas al interés colectivo, las organizaciones de trabajo podrán asociarse en asociaciones económicas.

Las organizaciones de trabajo pueden asociarse también para fomentar la producción u otras de sus actividades, la colaboración mutua y la solución de otras cuestiones de interés colectivo.

La administración de las asociaciones creadas por las organizaciones de trabajo se basa en los principios de la gestión de los trabajadores en las organizaciones de trabajo asociadas.

Las organizaciones de trabajo pueden asociar sus recursos con el objetivo de fomentar y desarrollar sus actividades y pueden contraer otros convenios relativos a las actividades conjuntas.

Con arreglo a la ley federal, pueden crearse cámaras y comunidades económicas y ser prescritas las condiciones para la asociación obligatoria de ciertas categorías de organizaciones de trabajo en cámaras y comunidades económicas.

Artículo 20. La tierra constituye un bien de interés colectivo. Cada parcela debe ser explotada conforme a las condiciones generales establecidas por la ley, que garantizan una racional explotación de tierras, como también garantizan otros intereses colectivos.

Los bosques y los terrenos forestales gozan de un amparo especial establecido por la ley.

Artículo 21. La sociedad garantiza las condiciones materiales y otras para crear y desarrollar organizaciones agrícolas de trabajo sobre la base de la propiedad social de la tierra y en las condiciones de trabajo social, como también para efectuar la colaboración entre los agricultores y las organizaciones cooperativistas y otras organizaciones de trabajo.

A los agricultores se les garantiza el derecho de propiedad de tierras laborables hasta un límite de diez hectáreas de superficie por familia.

La ley establece los límites y las condiciones bajo las cuales los agricultores pueden tener derecho de propiedad sobre otras superficies de tierra, como también establece los límites y las condiciones bajo las cuales otros ciudadanos pueden tener derecho de propiedad de superficies agrícolas y otras.

El derecho de propiedad de bosques y terrenos forestales se regulariza por la ley.

Artículo 22. Los ciudadanos pueden ejercer actividades agrícolas, artesanas y otras de servicio o semejantes para adquirir ingresos, dentro de los límites y condiciones establecidos por la ley.

La ley establece los límites y condiciones en los que los ciudadanos pueden gozar del derecho de propiedad de medios de producción y de establecimientos asignados para desarrollar actividades agrícolas, artesanas y otras de servicio o semejantes, basadas en el trabajo propio.

Queda prohibido emplear la mano de obra ajena con fines lucrativos.

En el sector de la producción agrícola, de la artesanía y de otras actividades de servicio o semejantes, desarrolladas por los ciudadanos a base del trabajo propio, se puede permitir, dentro de los límites y bajo las condiciones establecidas por la ley, el empleo del trabajo adicional de otras personas.

Artículo 23. A los ciudadanos se les garantiza el derecho de propiedad de objetos que sirven para el consumo y el uso personales o para la satisfacción de sus necesidades culturales y de otras necesidades individuales.

Los ciudadanos pueden gozar del derecho de propiedad de viviendas que sirven para satisfacer sus necesidades individuales y familiares, como también para desarrollar actividades basadas en el trabajo individual y conforme al derecho de los ciudadanos garantizado por la presente Constitución y con arreglo a las condiciones fijadas por la ley.

La ley federal establece los límites para el derecho de propiedad de edificios de vivienda y de viviendas.

Artículo 24. La ley dicta las condiciones bajo las cuales pueden tener derecho de propiedad las organizaciones social-políticas y asociaciones de ciudadanos en cuanto a los bienes inmuebles y otros objetos que sirven para satisfacer los intereses colectivos de sus miembros y para cumplir las tareas propias de tales organizaciones, como igualmente establece las condiciones bajo las que pueden disponer de recursos sociales que sirven para la misma finalidad.

Artículo 25. Los bienes inmuebles que fueren objeto del derecho de propiedad de los ciudadanos y personas jurídicas, podrán ser objeto de expropiación mediante una adecuada indemnización, o podrá ser limitado este derecho de propiedad por causa de un interés colectivo fijado por la ley federal.

El derecho de propiedad de objetos que constituyen tesoro cultural podrá ser limitado por la ley si así lo requiere el interés colectivo.

Artículo 26. A fin de procurar las condiciones necesarias para un óptimo desarrollo económico y cultural, de igualar las condiciones generales del trabajo y de la adquisición de ingresos, de establecer los criterios de la distribución según el trabajo y los del desarrollo de las relaciones sociales socialistas, las comunidades social-políticas adoptarán medidas, dentro del marco de sus derechos y obligaciones, para lograr un sistema económico único; planificarán el desarrollo de la economía y de las bases materiales de otras actividades, y con este objetivo elaborarán planes económicos sociales.

Para lograr las proporciones establecidas por los planes económicos sociales, las comunidades social-políticas dictan prescripciones y otros actos de carácter general, crean fondos y reservas sociales y adoptan medidas económicas y otras.

Las comunidades social-políticas tienen personalidad jurídica.

Artículo 27. Los recursos destinados para la reproducción en el sector socializado, obtenidos en el término de una comunidad social-política como recursos colectivos para la reproducción social, se emplean en dichas comunidades

en proporción con la parte que hubieren tenido los trabajadores en su creación. Dichos recursos se emplean en virtud de los criterios únicos sobre el empleo de los recursos de reproducción social y conforme a las condiciones y criterios establecidos por las prescripciones que garantizan la coordinación del desarrollo económico y el logro de otras relaciones previstas en los planes económicos sociales.

Otros recursos sociales sirven también para desarrollar las bases materiales de las comunidades social-políticas, conforme a los principios únicos del sistema crediticio.

A las comunidades social-políticas les pertenecen los recursos provenientes de los ingresos individuales, como también los que provienen de otras fuentes fijadas por la ley y de acuerdo con el principio de la distribución según el trabajo, que se asignan para satisfacer las necesidades sociales en sus respectivos territorios, fijando ellas mismas la cantidad y el empleo de dichos recursos.

A una república o región insuficientemente desarrollada, la sociedad les procura las condiciones materiales y otras para su más rápido desarrollo económico y para crear las bases materiales de sus actividades sociales.

Artículo 55. Queda garantizado el derecho de herencia.

Nadie podrá poseer bienes inmuebles y medios de trabajo en un volumen superior al que hubiere sido fijado por la Constitución o las leyes.

10. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA SOCIALISTA DE RUMANIA (AGOSTO DE 1965)

Artículo 5. La economía nacional de Rumania es una economía socialista, fundada sobre la propiedad socialista de los medios de producción.

En la República Socialista de Rumania, la explotación del hombre por el hombre está abolida para siempre y se aplica el principio socialista de la repartición según la cantidad y la calidad del trabajo.

El trabajo es un deber de honor para cada ciudadano del país.

Artículo 7º Las riquezas del subsuelo, las minas, los terrenos apartados al Fondo Financiero del Estado, los bosques, las aguas, las fuentes de energía natural, las fábricas y las industrias, los bancos, las explotaciones agrícolas del Estado, las maquinarias y los tractores, las vías de comunicación, los medios de transporte y de telecomunicaciones del Estado, los fondos del Estado de edificaciones y de habitaciones, la base material de las instituciones socioculturales del Estado destinados a todo el pueblo, son propiedad del Estado.

Artículo 6º La propiedad socialista de los medios de producción es ya propiedad del Estado —por los bienes pertenecientes a todo el pueblo— sea propiedad cooperativa —para los bienes pertenecientes a cada organización cooperativa.

Artículo 8. El comercio exterior es monopolio del Estado.

Artículo 9. La tierra de las cooperativas agrícolas de producción, el arriendo, los útiles, las instalaciones y las construcciones a ellos pertenecientes, son propiedad cooperativa.

El lote de terreno del cual las explotaciones familiares de los campesinos cooperadores, conforme a los Estatutos de las Cooperativas Agrícolas de Producción, tienen el disfrute, es propiedad cooperativa.

La casa de habitación y las construcciones anexas, el terreno sobre el que ellos se encuentran así como, conforme a los Estatutos de las Cooperativas Agrícolas de Producción, los animales de producción y el pequeño equipo agrícola, son propiedad personal de los campesinos cooperadores.

Los instrumentos, las máquinas, las instalaciones y las construcciones de las cooperativas artesanales y de las cooperativas de consumición, son propiedad cooperativa.

Artículo 10. La forma socialista de organización de la agricultura y las cooperativas agrícolas de producción aseguran las condiciones necesarias al cultivo intensivo del suelo y a la aplicación de la ciencia avanzada contribuyen, por el crecimiento de la producción, al desarrollo de la economía nacional, a la elevación continua del nivel de vida del campesinado y de todo el pueblo.

El Estado ayuda a las cooperativas agrícolas de producción y protege su propiedad. De la misma forma, el Estado ayuda a las otras organizaciones cooperativas y protege su propiedad.

Artículo 11. En las condiciones de la agricultura cooperativizada, el Estado garantiza a los campesinos que no se pueden asociar en cooperativas agrícolas de producción la propiedad de la tierra que ellos cultivan para ellos mismos y su familia, así como la propiedad de los animales de ordeño y de producción.

Se garantiza igualmente la propiedad de los artesanos sobre sus propios talleres.

Artículo 12. Los terrenos y las construcciones pueden ser expropiadas únicamente en caso de trabajos de interés público y junto al pago de una justa indemnización.

Artículo 13. En la República Socialista de Rumania, toda la actividad del Estado tiene por finalidad el desarrollo del régimen y el florecimiento de la

nación socialista, la elevación continua del bienestar material y cultural del pueblo, la garantía de la libertad y de la dignidad del hombre, la afirmación multilateral de la persona humana.

Con este fin, el Estado socialista rumano organiza, planifica y dirige la economía nacional; defiende la propiedad socialista; garantiza el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos, asegura la legalidad socialista y defiende el orden legal; desarrolla la enseñanza de todos los grados, asegura las condiciones necesarias al desarrollo de la ciencia, del arte y de la cultura, asegura la protección de la salud pública; asegura la defensa del país y organiza su Fuerzas Armadas; organiza las relaciones con los otros Estados.

(Traducción)

11. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA
(8 DE ABRIL DE 1968)

Informations Constitutionnelles et Parlamentaires

TÍTULO I

Bases de la sociedad y del Estado socialista

CAPÍTULO II

Bases económicas, ciencias, enseñanza y cultura

Artículo 9

1. La economía nacional de la República Democrática Alemana tiene su fundamento en la propiedad socialista de los medios de producción. Se desarrolla conforme a las leyes económicas del socialismo, sobre la base del beneficio de producción socialista. Las rentas de producción socialista son establecidas al término de la lucha contra el sistema de la economía del capitalismo monopolista que, por su política agresiva y aventurera, no aporta más que daños a la economía alemana. La supresión del poder de los monopolistas y de los grandes propietarios financieros, la liquidación de la economía de interés capitalista permiten eliminar las causas de las políticas de guerra y de la explotación del hombre por el hombre.

2. La economía nacional de la República Democrática Alemana tiene por objetivo la consolidación del socialismo, la satisfacción de las necesidades materiales y culturales de los ciudadanos, el florecimiento de la personalidad y de las rentas sociales en el socialismo.

3. La República Democrática Alemana aplica el principio de la planificación y de gestión de la economía nacional y de todos los otros aspectos de la vida social. La economía nacional de la República Democrática Alemana es la economía planificada. El sistema económico del socialismo asienta la planificación y la gestión centrales estatales de los principales aspectos del desarrollo social a la autonomía de los productores socialistas de mercancías y de los órganos locales del poder del Estado.

4. El régimen de la moneda y el sistema financiero provienen de la competencia del Estado socialista. No podrá ser afectado de la reserva pública o descontado del impuesto en los términos de la ley.

5. La economía exterior, así como el comercio exterior y las operaciones en valores extranjeros, son monopolio del Estado.

Artículo 10

1. La propiedad socialista comprende: la propiedad social, bien de todo el pueblo; la propiedad cooperativa de los trabajadores colectivos, y la propiedad de las organizaciones sociales de ciudadanos.
2. La defensa y el crecimiento de la propiedad socialista son deberes del Estado socialista y de sus ciudadanos.

Artículo 11

1. El derecho a la propiedad personal y el derecho de herencia está garantizado. La propiedad personal sirve a la satisfacción de las necesidades materiales y culturales de los ciudadanos.
2. Los derechos de autor y de inventor son puestos bajo la protección del Estado socialista.
3. El uso de la propiedad, así como el disfrute de los derechos de autor y de inventor, no deben dañar a la sociedad.

Artículo 12

1. Las riquezas del subsuelo, las minas, las centrales energéticas, los embalses y las aguas, las riquezas naturales de la plataforma continental, las grandes empresas industriales, los bancos y los establecimientos de seguridad, los arrendamientos del Estado, las vías de comunicación, las ferrovías, los medios de transporte de la navegación marítima y aérea, las instalaciones de correos y de comunicaciones, son propiedad del pueblo. La propiedad privada de estos bienes es inadmisibles.

2. El Estado socialista asegura la exploración de la propiedad del pueblo, buscando el más grande provecho para la sociedad. La economía socialista planificada y el derecho económico socialista sirve a este objetivo. La utilización y la explotación de la propiedad del pueblo son confiadas exclusivamente a las empresas nacionalizadas y a las instituciones del Estado. Sobre una base contractual, el Estado puede confiar la utilización y la explotación de la propiedad del pueblo a las cooperativas, a las organizaciones o asociaciones sociales. Tal transferencia de gestión debe servir los intereses de todos y acrecen las riquezas sociales.

Artículo 13. Los instrumentos, las máquinas, las instalaciones, las construcciones de las cooperativas socialistas, los arriendos de las cooperativas de producción agrícola, el producto de la explotación cooperativa de la tierra y de los medios de producción cooperativas, son propiedades de las cooperativas.

Artículo 14

1. La explotación y la puesta en servicio de las empresas y de las instituciones económicas privadas con fines lucrativos deben tener como fin la satisfacción de las necesidades de la sociedad, el aumento de la prosperidad del pueblo y el acrecentamiento de las riquezas sociales.
2. El Estado fomentará la cooperación completa de las empresas y de las instituciones socialistas con las empresas y las instituciones privadas. Conforme a las necesidades de la sociedad, las empresas privadas pueden pedir la participación del Estado.
3. Se prohíbe crear asociaciones económicas privadas para realizar una concentración de poder económico

Artículo 15

1. El suelo de la República Democrática Alemana es una de las riquezas naturales más grandes. Debe ser protegido y explotado racionalmente. El suelo explotado a los fines de agricultura y al cultivo de los bosques no puede ser destinado a otros fines que los acordados por los organismos competentes del Estado.
2. Para garantizar el bien común, el Estado y la sociedad protegen la naturaleza. La lucha contra la polución de las aguas y del aire, la protección de la fauna y de la flora, así como de los sitios naturales de la patria, corresponde a los órganos competentes del Estado. Todos los ciudadanos están invitados a tomar parte en esto.

Artículo 16. La expropiación no es posible sino por causa de interés público legalmente constatado y luego de un pago de justa indemnización. No se procederá a la expropiación si no es por causa de interés público, no se puede entender de otra manera.

(Traducción)

12. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA POPULAR
DE ALBANIA (1968)

PRIMERA PARTE

Principios fundamentales

CAPÍTULO II

Orden social y económico

Artículo 7. En la República Popular de Albania, los medios de producción están constituidos por los bienes comunes del pueblo que se encuentran en manos del Estado, de los bienes pertenecientes a las organizaciones cooperativas populares, así como los bienes de las personas privadas físicas o morales.

Son bienes comunes del pueblo todas las minas y las otras riquezas del subsuelo, las aguas, los recursos naturales, los bosques, los pastos, los medios de comunicación aéreo, ferroviario y marítimo, el correo, las estaciones de radio y los bancos.

El comercio exterior está puesto bajo el control del Estado. El Estado rige y controla también todo el comercio interior.

Artículo 8. A fin de proteger los intereses vitales del pueblo, de elevar su nivel de bienestar y de explotar todas las posibilidades y todas las fuerzas económicas, el Estado dirige la vida y el desarrollo económico según el plan general. Apoyándose en el sector económico del Estado y en el de las cooperativas, el Estado ejerce un control general sobre el sector de la economía privada.

En vista de la realización de su plan general, el Estado se apoya en las organizaciones sindicales de los obreros y de los empleados, en las cooperativas campesinas, así como en otras organizaciones de las masas laborales.

Artículo 9. La administración de la propiedad del Estado está regida por la ley.

La propiedad del Estado está particularmente favorecida por el Estado.

Artículo 10. El Estado se interesa particularmente por el movimiento cooperativo, lo defiende y lo favorece.

Artículo 11. La propiedad y la iniciativa privada, así como el derecho de herencia sobre los bienes privados están garantizados. Nadie puede usar de su derecho de propiedad privada en perjuicio de la colectividad.

La propiedad privada puede ser limitada y expropiada cuando el interés general lo exija y ello en virtud de una ley.

Una ley fijará en qué caso y en qué medida será indemnizado el propietario.

En las mismas condiciones pueden ser nacionalizadas ciertas ramas de la economía o ciertas empresas cuando el interés general lo exija.

Los monopolios, los *trusts*, los cárteles, etc., creados con el fin de dictar los precios y de monopolizar los mercados en detrimento de la economía nacional, están prohibidos.

Artículo 12. La tierra pertenece a aquellos que la trabajan. Se determina por la ley en qué caso una institución o una persona que no trabaja la tierra puede permanecer siendo su propietario y en qué medida.

Los grandes dominios no pueden estar, por ninguna razón, en manos de los particulares.

La ley determina la superficie máxima de tierra que puede ser propiedad privada.

El Estado fomentará el desarrollo socialista de agricultura creando las explotaciones agrícolas del Estado, de las maquinarias, tractores y ayudando las cooperativas agrícolas y otras formas de asociación de los campesinos trabajadores, constituidas según el principio de libre consentimiento.

Por su política económica, por los créditos y por el sistema fiscal, el Estado defiende y sostiene particularmente al pequeño y mediano campesinado.

Artículo 13. El trabajo es la base del régimen social de la República Popular de Albania.

El trabajo es, para todo el ciudadano apto para el trabajo, un deber y una cuestión de honor, según el principio: "Quien no trabaja, no come".

En la República Popular de Albania se aplica el principio socialista: "De cada quien según su capacidad, a cada quien según su trabajo".

(Traducción del francés)

13. CONSTITUCION DE BULGARIA (16-V-1971)

Artículo 13

1. El sistema económico de Bulgaria es socialista. Está basado en la pro-

propiedad pública de los medios de producción, prohíbe la explotación del hombre por el hombre y se desarrolla en una economía comunista en una forma planificada.

2. El desarrollo de una economía socialista conlleva el progreso idóneo de una sociedad y de la libertad individual, la ampliación de la democracia socialista, el bienestar del pueblo y el mejoramiento del país.
3. La economía de la República Popular de Bulgaria se desarrolla como parte del sistema mundial de economía socialista.

Artículo 14. Las formas de propiedad en la República Popular de Bulgaria son: propiedad estatal (de todo el pueblo); propiedad cooperativa, propiedad de las organizaciones públicas y propiedad privada.

Artículo 15

1. La propiedad estatal (de todo el pueblo) es la forma de la propiedad socialista y constituye una reserva integral. Determina el carácter socialista de la propiedad de la cooperativa y de las organizaciones públicas y goza de protección especial.
2. Las formas de la propiedad estatal se desarrollan gradualmente y tienden a homogeneizarse para evolucionar hacia la propiedad unificada de todo el pueblo.

Artículo 16

1. Plantas y fábricas, bancos, riquezas del subsuelo, recursos naturales de poder, bosques, pastos, aguas, caminos, ferrocarriles, transportes aéreos y marítimos, correos, telégrafos, teléfonos, radio y televisión son propiedad estatal (de todo el pueblo).
2. En caso de estipulación en la ley, las organizaciones públicas y cooperativas pueden poseer medios de producción y otra propiedad.

Artículo 19

1. La propiedad cooperativa pertenece a la colectividad del pueblo trabajador, unido voluntariamente para la actuación conjunta de las actividades económicas, las uniones cooperativas y las organizaciones intercooperativas.
2. El derecho de la propiedad cooperativa es ejercido en el interés de la sociedad y de los cooperados.

Artículo 20. La propiedad de las organizaciones públicas sirve para el logro de sus fines, incluyendo la implementación de las actividades transferidas a ellos por los cuerpos estatales, como también la satisfacción de los intereses públicos.

14. CONSTITUCION DE GRECIA (9 DE JUNIO DE 1975)

Artículo 17

1. La propiedad está colocada bajo la protección del Estado. Los derechos que se derivan no pueden nunca ejercerse en detrimento del interés general.
2. Nadie puede ser privado de su propiedad, si no es por causa de utilidad pública; debidamente probada en los casos y siguiendo el procedimiento determinado por la ley y siempre mediante una indemnización completa previa. Esta debe corresponder al valor que posee la propiedad expropiada al día de la audiencia sobre el asunto concerniente a la fijación provisoria de lo indemnizado por el Tribunal. En el caso de una demanda, que tiene por objeto la fijación inmediata de la indemnización definitiva, se toma en consideración el valor que posee la propiedad expropiada el día de la audiencia del Tribunal sobre esta demanda.
3. No se tiene en cuenta el cambio eventual del valor de la propiedad expropiada sobrevenido después de la publicación del acto de expropiación y exclusivamente en razón de esto.
4. La indemnización es siempre fijada por los Tribunales civiles; se puede fijar incluso provisoriamente por vía judicial, después de la audición o convocatoria del que tiene derecho, a quien el Tribunal puede, a su discreción, obligar a proveer una caución análoga antes del pago de la indemnización, según las disposiciones de la ley.

Hasta la entrega de la indemnización definitiva o provisoria, todos los derechos del propietario quedan intactos; la ocupación de su propiedad no es permitida.

La indemnización debe ser entregada a más tardar en el plazo de un año y medio (1½) después de la publicación de la decisión donde se fija la indemnización provisional; en el caso de una demanda por la fijación inmediata de la indemnización definitiva, ésta debe entregarse a más tardar en el plazo de un año y medio después de la publi-

cación de la decisión del Tribunal, fijando la indemnización definitiva; a falta de lo cual la expropiación será levantada de pleno derecho. La indemnización, como tal, no está sometida a ninguna imposición, tasa o retención.

5. La ley fija los casos en que hay lugar de acordar obligatoriamente una indemnización a quienes tienen derechos, por la pérdida de las rentas provenientes de la propiedad inmobiliaria expropiada, hasta el día del pago de la indemnización.
6. En el caso de la ejecución de trabajos de utilidad pública o de un interés más general para la economía del país, la ley puede permitir la expropiación en provecho del Estado de zonas más vastas, que se encuentran fuera de los terrenos que son necesarios para la ejecución de los trabajos. Esta misma ley fija las condiciones y términos de tal expropiación, así como las modalidades de la disposición o de la utilización, a los fines públicos o de la utilidad pública en general, de terrenos expropiados que no son necesarios para la ejecución del trabajo previsto.
7. La ley puede prever que, en el caso de ejecución de trabajos de utilidad pública manifiesta, en provecho del Estado o de las personas morales de derecho público, o de las colectividades locales, o de los organismos de utilidad pública y de las empresas públicas, se permita la apertura de túneles con la profundidad indicada. Esta apertura es efectuada sin la indemnización mientras la explotación normal del inmueble situado por encima del túnel no sea efectuada.

Artículo 18

1. Las leyes especiales regulan las materias concernientes a la propiedad y a la concesión de las minas de metales, de los minerales, de las grutas, de los sitios y tesoros arqueológicos, de aguas minerales, corrientes y subterráneas, y de la riqueza del subsuelo en general.
2. La ley regula las materias concernientes a la propiedad, la explotación y la gestión de las lagunas y de los grandes lagos, así como las modalidades de la concesión de terrenos surgidos a raíz de trabajos de secamiento.
3. Las leyes especiales reglan las modalidades de las requisiciones para las necesidades de las Fuerzas Armadas en caso de guerra o de movilización, o para atender a una necesidad social inmediata, susceptible de poner en peligro el orden público o la salud pública.

4. La reconstrucción de las tierras agrícolas están permitidas, según el procedimiento determinado por una ley especial, en vista de una explotación más racional del suelo. De la misma forma está permitida la toma de las medidas indicadas para evitar el parcelamiento de las pequeñas propiedades agrícolas o para facilitar su reconstrucción.
5. Fuera de los casos mencionados en los párrafos precedentes, se permite prever, por vía legislativa, toda otra privación del libre uso y del usufructo de la propiedad necesaria en razón de circunstancias particulares. La ley determina a la persona encargada del pago a quienes tienen derechos al precio de la utilización o del usufructo y el procedimiento aplicable a este pago, que debe corresponder a las condiciones existentes cada vez.

Las medidas impuestas en la aplicación del presente párrafo son levantadas enseguida que las razones particulares que las hayan provocado cesan de existir. En el caso de una prolongación injustificada de estas medidas, el Consejo de Estado estatuye sobre su abrogación por categorías de casos y sobre la demanda de toda persona que tenga un interés legal.

6. La ley puede regular la disposición de tierras abandonadas a los fines de su valorización en provecho de la economía nacional y el establecimiento de los cultivadores sin tierra. Por la misma ley serán igualmente fijadas las modalidades de indemnización parcial o total de los propietarios, en el caso en que éstos reaparecieran en un lapso razonable.
7. La copropiedad obligatoria de los terrenos adyacentes en las regiones urbanas, pueden ser impuestas por vía legislativa, cuando la construcción reparada sobre ellos o de una parte de ellos no corresponda a las condiciones de construcción existentes o previstas para el futuro en la región concerniente.
8. La propiedad agrícola de los monasterios Stavropygiaques de San Anastasio Pharmacolytria en Chalcidique, de los Vlatades a Thessalonique y del Evangelista San Juan El Teólogo a Patmos, a excepción de sus dependencias, no son susceptibles de expropiación. De la misma forma no son susceptibles de expropiación los bienes de los Patriarcas de Alejandría, de Antioquía y de Jerusalem, así como el Monasterio del Sinaí.

c) *Constituciones de Asia y países árabes*

1. Vietnam	1959
2. Mongolia	1960
3. Turquía	1961
4. Irak	1964
5. Afganistán	1964
6. Siria	1969
7. Libia	1969
8. Yemen (República Democrática Popular)	1970
9. Confederación de Repúblicas Árabes	1971
10. Egipto	1971
11. Bangladesh	1972
12. Corea (República Popular Democrática)	1972
13. China (República Popular)	1975 (anexo el texto de 1954)

1. REPUBLICA POPULAR DEL VIETNAM (CONSTITUCION DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1959)

CAPÍTULO II

Del Régimen Económico y Social

Artículo 9. La República Democrática del Vietnam pasa gradualmente del régimen de democracia popular al socialismo para el desarrollo y la transformación socialista de la economía nacional, que surge de su economía atrasada, una economía socialista dotada de una industria y de una agricultura moderna y reposa sobre las ciencias y las técnicas de vanguardia.

El objetivo fundamental de la política económica de la República Popular del Vietnam es el desarrollo ininterrumpido de las fuerzas productivas, con el fin de elevar el nivel de vida material y cultural del pueblo.

Artículo 10. El Estado dirige las actividades económicas después de un plan único.

El Estado se apoya en los órganos de Estado, las organizaciones sindicales, las cooperativas y otras organizaciones de masas trabajadoras, para establecer y realizar los planes económicos.

Artículo 11. En la República Democrática del Vietnam, durante el período de transición actual, las principales formas de propiedad de los medios de producción son las siguientes: la propiedad del Estado, es decir, todo el pueblo, la propiedad de cooperativas, es decir, la propiedad colectiva de las masas laboriosas, la propiedad de los trabajadores individuales, y la propiedad de los burgueses nacionales.

Artículo 12. El sector del Estado de la economía, que releva de la propiedad de todo el pueblo, juega el papel dirigente en la economía nacional, y el Estado mismo asume la prioridad del desarrollo.

Las minas, las corrientes de agua y los bosques, tierras baldías y otros recursos naturales que la ley declare bienes del Estado son propiedad de todo el pueblo.

Artículo 13. El sector cooperativo de la economía depende de la propiedad colectiva de las masas laboriosas.

El Estado fomenta, guía y ayuda particularmente todo subdesarrollo.

Artículo 14. El Estado protege, conforme a la ley, el derecho de propiedad de los campesinos sobre sus tierras y otros medios de producción.

El Estado guía a los campesinos y los ayuda activamente a perfeccionar las técnicas agrícolas, a desarrollar la producción y los exhorta a organizarse en cooperativas de producción, de compra y de venta, de crédito con arreglo al principio del libre consentimiento.

Artículo 15. El Estado protege, conforme a la ley, el derecho de propiedad de los obreros y otros trabajadores individuales y los ayuda activamente a perfeccionar sus modos de trabajo; él los exhorta a organizarse en cooperativas de producción, de comprar y de vender, con arreglo al principio del libre consentimiento.

Artículo 16. El Estado protege, conforme a la ley, el derecho de propiedad de los burgueses nacionales sobre sus propios medios de producción y otros bienes.

El Estado se interesa en orientar sus actividades en el sentido del interés nacional y del bienestar general para hacerlos contribuir en el desarrollo de la economía nacional en el aspecto del plan económico del Estado. El los exhorta y los guía en vista de la transformación socialista, por la creación de empresas mixtas del Estado y privadas y otras formas de transformación.

Artículo 17. El Estado interviene estrictamente todo uso abusivo de los bienes privados dispuesto a perturbar la vida económica del país y a sabotear el plan económico del Estado.

Artículo 18. El Estado protege el derecho de propiedad de los ciudadanos sobre sus rentas lícitas, sus ahorros, sus casas de habitación y otros objetos de uso personal.

Artículo 19. El Estado protege, conforme a la ley, el derecho de herencia de los ciudadanos sobre los bienes privados.

Artículo 20. La compra por autoridad de medios de producción tanto en la ciudad como en el campo, requiere la justa indemnización y es decidida por el Estado en caso de necesidad y por razones de interés público, en los límites y las condiciones previstas por la ley.

Artículo 21. El trabajo es la base del desarrollo de la economía nacional y de la elevación del nivel de vida material y cultural del pueblo.

El trabajo es un deber y un honor para los ciudadanos. El Estado exhorta entre los trabajadores manuales e intelectuales el espíritu creador y el ardor por el trabajo.

2. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA POPULAR DE MONGOLIA (6 DE JULIO DE 1960)

Documentation Française, 31 mai, 1971.

CAPÍTULO II

Principios económicos fundamentales y funciones del Estado

Artículo 8. La base económica de la República Popular de Mongolia está constituida por el sistema socialista de economía y por la propiedad socialista de los medios de producción, creada como consecuencia de la larga lucha intensiva de los trabajadores de la República Popular de Mongolia y obtenida por la supresión de la propiedad privada de los medios de producción y la liquidación de la explotación del hombre por el hombre.

Artículo 9. La propiedad socialista de la República de Mongolia reviste dos formas: la propiedad del Estado (bienes de todo el pueblo) y la propiedad cooperativa (bienes de las Uniones de Economía Agrícola y de las otras clases de cooperativas).

Artículo 10. La tierra y el subsuelo, los bosques, las aguas y sus riquezas, las fábricas del Estado, las industrias, las minas, las centrales eléctricas, los medios de transporte ferroviario, por automóvil, por agua o por avión, los caminos, los medios de transmisión, los bancos, las empresas agrícolas del Estado (empresas del Estado, maquinarias de ganadería), las empresas comunales

del Estado y la mayoría de las viviendas en las ciudades y en las otras aglomeraciones, las materias primas, los productos y los materiales de las empresas del Estado, las empresas comerciales y de almacenamiento del Estado, los establecimientos científicos y culturales y los bienes de todas las organizaciones del Estado forman parte de la propiedad del Estado, es decir, constituyen los bienes de todo el pueblo.

Artículo 11. Las empresas sociales de las uniones agrícolas y de las otras organizaciones cooperativas, así como sus instrumentos y su material, la producción suministrada por ellas, las construcciones sociales, los tractores, las máquinas combinadas y las otras máquinas o utensilios agrícolas, los medios de transporte, el ganado colectivizado y los otros bienes relevantes de la propiedad socialista de estas uniones y organizaciones cooperativas. Cada hogar en las uniones cooperativas agrícolas recibe una renta principal de la participación personal de cada miembro del hogar a la producción social de la unión y posee una economía auxiliar personal donde el monto es fijado por los estatutos de la Unión Cooperativa Agrícola.

Artículo 12. La tierra utilizada por la Unión Cooperativa Agrícola le está conferida en disfrute perpetuo gratuito.

Artículo 13. El derecho a la propiedad personal del ciudadano sobre las rentas de su trabajo y de su ahorro, sobre su habitación y sobre la economía personal auxiliar, sobre los objetos de consumo personal y de uso doméstico, así como el derecho a heredar de la propiedad personal, son garantizados por la ley a los ciudadanos. Se prohíbe utilizar el derecho de propiedad personal para dañar los intereses del Estado o los de la sociedad.

Artículo 14. El Estado socialista protege y afirma la propiedad socialista, asegura una activa participación de los miembros de la sociedad en la constitución económica y cultural, refuerza lo más posible la disciplina socialista del trabajo y organiza la defensa del país contra las agresiones imperialistas.

Artículo 15. La vida económica de la República de Mongolia está determinada y orientada por un plan económico del Estado único que busca el crecimiento permanente y el desarrollo de las fuerzas productivas del país, la seguridad continua de la reproducción socialista expandida y el progreso incesante del desenvolvimiento material y del nivel cultural de los trabajadores.

La política económica del Estado, en el plan económico nacional, está destinada a expresar las exigencias de las leyes económicas del socialismo.

El Plan Económico Nacional de la República de Mongolia es aprobado por el Gran Khoural Popular y tiene fuerza de ley.

La dirección de la economía nacional por el Estado debe estar obligatoriamente acompañada por una larga introducción de una contabilidad estricta y del control de la producción y de la distribución, de la retribución del trabajo y del consumo.

Artículo 16. La política financiera y de bloqueo de la República de Mongolia está orientada hacia la elevación de las posibilidades económicas del país hacia el desenvolvimiento y el reforzamiento de la propiedad socialista, hacia el desenvolvimiento de la cultura socialista y hacia la elevación del comportamiento de los trabajadores conforme al plan de desenvolvimiento de la economía nacional; el Estado establece cada año su plan financiero bajo la forma de presupuesto del Estado, aprobado y publicado bajo forma de ley.

La fuente principal de las rentas del presupuesto del Estado de la República de Mongolia está constituida por las rentas y acumulación de la economía socialista.

Artículo 17. El objetivo de la producción socialista y su motivación en la República de Mongolia es la creación constante del producto social para la acumulación de una renta nacional necesaria a la satisfacción de las necesidades tanto personales como colectivas que se desarrollen entre los miembros de la sociedad socialista.

Toda la renta nacional, en la República de Mongolia, deducción hecha de los fondos sociales, está destinada a aumentar la producción socialista, a crear unas reservas, a desarrollar la educación y la salud pública, a ayudar las personas ancianas y a aquellas que no pueden trabajar y también a satisfacer las otras necesidades colectivas de los miembros de la sociedad, a ser repartidos entre ellos conforme a la calidad y a la cantidad de trabajo producido sobre la base del principio del socialismo: "a cada uno según sus posibilidades, a cada uno según sus necesidades". El trabajo en la República de Mongolia es la condición necesaria y la base de la ejecución de la reproducción socialista *extendida*, la fuente de la creación del bienestar material y espiritual para el mejoramiento constante del *desenvolvimiento* de los trabajadores.

(Traducción)

3. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE TURQUIA (1961)

Artículo 36. Se reconoce el derecho de propiedad y de herencia.

Dichos derechos podrán hallarse restringidos por la ley únicamente en interés del bien común.

El ejercicio del derecho de propiedad no podrá resultar incompatible con el interés público.

Artículo 37. El Estado tomará las medidas necesarias a fin de realizar una explotación eficaz de la tierra y garantizar tierra a quienes la trabajen y no la posean o la posean en cantidad insuficiente. La ley puede, dentro de ese espíritu, ordenar la superficie de tierra según las distintas regiones y los diferentes suelos. El Estado facilitará la adquisición de material agrícola por parte de los cultivadores.

La distribución de tierras no podrá tener por consecuencia disminución alguna de la riqueza forestal o la reducción de cualquier otra riqueza de la tierra.

Artículo 38. El Estado y las personas morales públicas, en los casos de necesidad por el interés público, se hallarán autorizados a expropiar enteramente o en parte los bienes inmuebles de propiedad privada o a gravar dichos bienes con servidumbres administrativas, según reglas y procedimientos fijados por la ley, a condición de pagar al contado su valor real.

El sistema de pago del valor de las tierras expropiadas en virtud de otorgar tierras a los cultivadores, de estatificar los bosques, crear nuevos bosques y de realizar los proyectos de desarrollo, se hallará fijado por la ley. En los casos en que la ley prevea el pago discrecional, el plazo del pago no podrá sobrepasar diez años. En cuyo caso las cuotas son iguales y producirán el interés fijado por la ley.

El valor de la porción de tierras expropiadas que es indispensable, a fin de permitir a los cultivadores que exploten las mismas, de vivir de manera decente, así como el valor de las tierras que hayan sido expropiadas a los pequeños cultivadores, serán, sin excepción, pagados al contado.

Artículo 39. Las empresas privadas que tengan carácter de servicio público serán susceptibles de estatificación, en los casos de necesidad o de interés público, a condición de que el valor real les sea pagado según indique la ley. En los casos en que la ley prevea el pago discrecional, el plazo de amortización no podrá pasar de diez años y se hará en cuotas iguales productoras de interés al tanto por ciento indicado por la ley.

Artículo 40. Cada uno está en libertad de trabajar en el ramo de su elección. El establecimiento de empresas privadas es libre. La ley no podrá restringir esos derechos más que en razón de interés público.

El Estado tomará las medidas susceptibles de asegurarse que la gestión de las empresas privadas se hallará subordinada a las necesidades de la economía nacional y de sus fines sociales, así como de que trabajen en régimen de confianza y de estabilidad.

Artículo 41. La vida económica y social se halla reglamentada a fin de asegurar a todos un nivel de subsistencia conforme con la justicia, basado en un trabajo integral y compatible con la dignidad humana.

Constituye deber del Estado realizar el desarrollo económico, social y cultural según las vías democráticas, y, con ese fin, aumentar el ahorro nacional, encaminar las inversiones preferentemente hacia los sectores que se hallen necesitados por razón de interés público y elaborar planes de reactivación.

Artículo 129. El desarrollo económico, social y cultural son objeto de planificación; el desarrollo se realizará según dicho plan.

La constitución y atribuciones de la comisión planificadora, las reglas de elaboración, la puesta en vigor, aplicación y modificación del plan y las medidas tendientes a evitar modificaciones susceptibles de alterar la esencia del plan, se hallan regulados por una ley especial.

Artículo 130. Las riquezas naturales y sus fuentes de energía son propiedad del Estado y dependen de él. El derecho de prospección y explotación pertenece al Estado. Su prospección y explotación por parte del Estado, con asociación a la iniciativa privada o directamente por la iniciativa privada, estará subordinada a la autorización explícita de la ley.

Artículo 131. El Estado prepara leyes y toma las medidas pertinentes para la protección de bosques y repoblación de zonas desforestadas.

Los bosques del Estado son administrados y explotados por el Estado según la ley. La propiedad, administración y explotación de los bosques del Estado no podrán ser transferidas a particulares. Dichos bosques no podrán transformarse en propiedad privada por prescripción y no podrán ser gravados con otras servidumbres que las del interés público.

Las actividades y operaciones susceptibles de acarrear daños a los bosques no podrán estar autorizadas.

Igualmente está regulado por la ley el eventual desplazamiento de la población residente en bosques o su proximidad, si ello resultara aconsejable para la protección de los mismos.

Los bosques incendiados serán repoblados; dichas zonas no podrán ser entregadas a la agricultura ni al pastoreo.

No podrán decretarse amnistías generales para delitos forestales; no se tolerará propaganda política alguna tendiente a permitir la destrucción del patrimonio forestal.

4. CONSTITUCION INTERNA DE LA REPUBLICA DE IRAK
(PRESENTADA EL 3 DE MAYO DE 1964)

SEGUNDA PARTE

Los fundamentos de la sociedad

Artículo 8º El Estado orientará la economía nacional por un plan general establecido en colaboración con los sectores públicos y privados para promover el desarrollo económico y acrecentar la producción y el nivel de vida.

Artículo 7º El sistema económico de Irak se esforzará en cumplir un desarrollo económico y una justicia social que prohibirá toda forma de explotación social.

Artículo 9º La riqueza natural del país así como sus recursos y fuentes de energía son propiedad del Estado.

Artículo 10. El capital será el servicio de la economía nacional. Su empleo no irá jamás en contra del bienestar del pueblo.

Artículo 11. La propiedad pública será respetada. Protegerla será el deber de cada ciudadano; esto constituye una fuente de prosperidad y de pujanza de la nación.

Artículo 12. La propiedad privada será respetada en el cuadro de su función social definido por la ley y no podrá ser expropiada sino por causa de utilidad pública y en pago de una justa compensación prevista por la ley.

El derecho de herencia será garantizado según las previsiones de la jurisdicción islámica.

Artículo 13. La ley, fijando los límites autorizados de la propiedad agraria, impedirá el surgimiento del feudalismo.

(Traducción del francés).

5. CONSTITUCION DE AFGANISTAN (DEL 1-10-1964)

Artículo 29. La propiedad es inviolable.

Ella no puede ser confiscada sino conforme a la ley y en virtud de una decisión del tribunal competente.

La expropiación no es permitida sino con una finalidad de interés público y mediante el pago previo de una justa indemnización, según las disposiciones legales.

Nadie puede ser privado del derecho de adquirir una propiedad y de gozarla, bajo reserva de las restricciones establecidas por las leyes. El uso de una propiedad puede ser organizada y dirigida por la ley hacia una finalidad de utilidad general.

Sólo la ley puede autorizar el control de oficio de los bienes privados y exigir la declaración de éstos por su propietario.

(Traducción del francés).

6. CONSTITUCION PROVISIONAL DE LA REPUBLICA ARABE SIRIA
(1° DE MARZO DE 1969)

CAPÍTULO II

Principios económicos

Artículo 12

1. La economía del país es una economía socialista dirigida, exenta de toda forma de explotación.
2. Esta economía tiende a realizar la integración económica de toda la nación árabe en conjunto.

Artículo 13. La propiedad reviste una de las formas siguientes:

1. La propiedad popular, que comprende todas las posesiones y los bienes pertenecientes a la comunidad, tales como los recursos naturales y los servicios públicos organizados por el Estado o los establecimientos nacionalizados; el Estado los explota y dirige su administración en interés del pueblo en su conjunto.
2. La propiedad colectiva constituida principalmente por las posesiones comunes de las organizaciones populares y profesionales, de las unidades de producción, de las sociedades cooperativas y de otros establecimientos sociales.
3. La propiedad privada que es aquella de los individuos. La ley fija la extensión de esta propiedad, así como su función social, que no puede en ningún caso ser contraria al interés general; ella no puede ser expropiada sino por causa de utilidad pública y mediante una justa indemnización conforme a la ley.

Artículo 14. El derecho de sucesión está garantizado conforme a la ley.

Artículo 15. La explotación y el funcionamiento de los establecimientos

económicos privados deben responder a las necesidades sociales y tender a acrecentar el bienestar del pueblo y el patrimonio social.

Artículo 16. Los fondos públicos pertenecen al pueblo y el deber de los ciudadanos es el de protegerlos.

(Traducción del inglés).

7. CONSTITUCION DE LIBIA (11-XII-1969)

Artículo 7. El Estado propenderá a liberar la economía nacional de la dependencia e influencia extranjera, y la transformará en una economía nacional productiva basada en la propiedad pública del pueblo libio y en la propiedad privada de los ciudadanos como individuos.

Artículo 8. La propiedad pública es la base del desarrollo de la sociedad, de su crecimiento y de su autosuficiencia en la producción. La propiedad privada, si no es explotadora, está protegida. La expropiación tendrá lugar sólo de acuerdo con la ley. La herencia es un derecho que estará reglado de acuerdo con el Islamic Shairi'a.

Artículo 9. El Estado instituirá un sistema nacional de planificación que cubrirá los aspectos económicos, sociales y culturales. La cooperación entre los sectores públicos y privados será necesaria para el logro de los fines del desarrollo económico.

(Traducción del inglés).

8. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR DEL YEMEN (30 DE NOVIEMBRE DE 1970)

Artículo 15. Las empresas extranjeras, los bancos y las compañías de seguro han sido nacionalizados y han llegado a ser de propiedad pública.

Las empresas nacionalizadas y aquellas empresas productivas que serán establecidas por el Estado y las empresas productivas que serán instaladas por las cooperativas productivas son los pilares vitales en el desarrollo de la economía nacional. El pueblo trabajador está participando en las empresas nacionalizadas y está consciente de su responsabilidad hacia ellas.

La propiedad pública está protegida y goza de especial protección en su desarrollo por el Estado.

Los Consejos directivos de las empresas nacionalizadas y de las empresas públicas productivas son los representantes del Estado.

Artículo 16. La riqueza nacional y todos los extractos de ésta y las fuentes de poder, estén bajo o sobre o dentro de los límites de las aguas territoriales y el golfo continental son de propiedad del Estado, el cual asegurará su utilización.

El Estado ejercerá el control de los recursos públicos como está prescrito en la ley.

El Estado se encargará de los servicios de puerto y de todos aquellos que el interés público demande.

Artículo 18. La Constitución protege la propiedad privada. Su contenido y límite están reglamentados por las leyes y los deberes sociales hacia la sociedad.

La propiedad es una responsabilidad social y su uso no estará en contradicción con el bienestar público.

El Estado regulará y protegerá el derecho de herencia.

Artículo 20. El Estado reforzará el sector nacional privado de producción en orden de desarrollar la economía nacional.

Cuidará de los pequeños comerciantes, artesanos y pescadores y los alentará para desarrollar la economía nacional.

El Estado alentará el establecimiento de las sociedades cooperativas en esos sectores en los cuales las relaciones de propiedad están arregladas sobre bases de igualdad.

Artículo 24. Ningún extranjero poseerá propiedad alguna en la República Popular Democrática del Yemen, excepto en las condiciones definidas en la ley.

9. CONSTITUCION DE LA CONFEDERACION DE REPUBLICAS ARABES (PROCLAMACION DE DAMASCO, DE 20 DE AGOSTO DE 1971)

Artículo 12. La Constitución y las leyes de las Repúblicas garantizarán los principios y derechos siguientes:

n) La inviolabilidad de la propiedad privada en los límites de la ley y en forma de no perjudicar los derechos de la sociedad en la propiedad pública y cooperativa.

Esta proclamación fue firmada en esa fecha por Anouar El Sadat, Presidente de la República Árabe Unida; Moamar El Kadafi, Presidente del Consejo de la Revolución y del Consejo de Ministros de la República Árabe de Libia; y por Hafez El Assad, Presidente de la República Árabe Siria.

(Traducción del francés).

10. CONSTITUCION DE EGIPTO (PROMULGADA
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1971)

Artículo 29. La propiedad está sujeta al control del pueblo y está protegida por el Estado. La propiedad es de tres categorías: La propiedad pública, la propiedad cooperativa y la propiedad privada.

Artículo 30. La propiedad pública es la del pueblo; ella se afirma por la consolidación continua del sector público que dirige el progreso en todos los campos y asume en forma principal, la responsabilidad del plan de desarrollo.

Artículo 32. La propiedad privada está representada por el capital no explotador; la ley organiza su función social al servicio de la economía nacional y en el marco del plan de desarrollo, sin desviación o explotación. Los medios de explotación de la propiedad privada no deben ir en contra del interés público del pueblo.

Artículo 33. La propiedad del Estado es inviolable; su protección y su consolidación es un deber que incumbe a cada ciudadano, conforme a la ley, ya que ella constituye un apoyo a la fuerza de la patria, una base al sistema socialista y una fuente de bienestar para el pueblo.

Artículo 34. La propiedad privada es inviolable y no puede someterse a secuestro sino en los casos previstos por la ley y en virtud de una sentencia judicial. La propiedad privada no puede ser expropiada sino por causa de utilidad pública y mediante una indemnización de acuerdo a la ley. El derecho de sucesión está garantizado.

Artículo 35. La nacionalización no puede ser decidida sino por consideraciones de interés público, conforme a la ley y mediante una indemnización.

(Traducción del francés).

11. CONSTITUCION DE BANGLADESH (4-11-1972)

Artículo 13. El pueblo debe poseer o controlar los instrumentos y medios de producción y distribución, y con este fin en vista, la propiedad privada asume las siguientes formas:

- a) *Propiedad estatal*, ésta es la propiedad del Estado en representación del pueblo a través de la creación de un eficiente y dinámico sector público nacionalizado que comprenda los sectores claves de la economía.
- b) *Propiedad cooperativa*, ésta es la propiedad de cooperativas en representación de sus miembros dentro de los límites en la ley, y

- c) *Propiedad privada*, ésta es la propiedad individual dentro de los límites prescritos en la ley.

(Traducción del inglés).

12. CONSTITUCION SOCIALISTA DE LA REPUBLICA POPULAR
DEMOCRATICA DE COREA (PROMULGADA EL 27 DE DICIEMBRE
DE 1972)

CAPÍTULO II

Economía

Artículo 18. Los medios de producción en la República Popular Democrática de Corea son propiedad del Estado y de las organizaciones cooperativas.

Artículo 19. La propiedad del Estado es propiedad de todo el pueblo.

No existe limitación en cuanto a los objetos de la propiedad del Estado.

Todos los recursos naturales del país, las fábricas y empresas principales, los puertos, los bancos, el transporte y los centros de comunicación los tiene en propiedad exclusiva el Estado.

La propiedad del Estado desempeña el papel rector en el desarrollo económico en la República Popular Democrática de Corea.

Artículo 20. La propiedad de las organizaciones cooperativas es propiedad colectiva de los trabajadores incorporados en la economía cooperativista.

Las organizaciones cooperativas pueden tener en propiedad tierras, animales de tiro, aperos agrícolas, barcos pesqueros, edificios, etc., así como fábricas y empresas medianas y pequeñas.

El Estado protege por medio de la ley la propiedad de las organizaciones cooperativas.

Artículo 21. El Estado consolida y desarrolla el sistema de la economía cooperativa socialista y convierte gradualmente la propiedad de las organizaciones cooperativas en propiedad de todo el pueblo, de acuerdo con el deseo voluntario de todos sus miembros.

Artículo 22. Propiedad individual es la que se destina al consumo personal de los trabajadores.

La propiedad individual de los trabajadores se forma por la distribución socialista según el trabajo realizado y por los beneficios adicionales que les proporcionan el Estado y la sociedad.

Los productos obtenidos por el cultivo de parcelas individuales de los granjeros cooperativistas y de otras economías auxiliares individuales de los habitantes forman parte también de la propiedad individual.

El Estado protege por las leyes la propiedad individual de los trabajadores y les garantiza el derecho de heredarla.

13. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA (1975)

Artículo 5. En la República Popular China existen principalmente, en la etapa actual, dos tipos de propiedad sobre los medios de producción: propiedad socialista de todo el pueblo y propiedad colectiva socialista de las masas trabajadoras.

El Estado permite que los trabajadores individuales no agrícolas, según disposiciones coordinadas de cada organización vecinal en las ciudades y poblados o cada equipo de producción de las comunas populares rurales, se dediquen al trabajo individual sin explotar a otros y dentro de los límites admitidos por la ley. Al mismo tiempo, se les debe conducir paso a paso a tomar el camino de la colectivización socialista.

Artículo 6. El sector estatal de la economía constituye la fuerza dirigente de la economía nacional.

Son propiedad de todo el pueblo los yacimientos minerales, las aguas y aquellos bosques, tierras vírgenes y otros recursos pertenecientes al Estado.

El Estado puede expropiar mediante indemnización, tomar usufructo o nacionalizar tierras y otros medios de producción en la ciudad y en el campo en las condiciones que determine la ley.

Artículo 7. La comuna popular rural es una organización que fusiona en sí el poder de base y la administración económica.

En la etapa actual, en la economía de propiedad colectiva de la comuna popular rural se adopta, por lo general, el sistema de propiedad a tres niveles con el equipo de producción como base, es decir, propiedad a los niveles de comuna, brigada de producción y equipo de producción, con este último como unidad básica de contabilidad.

Con la condición de que se aseguren el desarrollo y el predominio absoluto de la economía colectiva de la comuna popular, los comuneros pueden cultivar una pequeña cantidad de tierra para uso personal y dedicarse a limitadas ocupaciones secundarias domésticas y, en las zonas ganaderas, pueden poseer a título personal un reducido número de cabezas de ganado.

Artículo 8. Los bienes públicos socialistas son inviolables. El Estado asegura la consolidación y el desarrollo de la economía socialista y prohíbe a toda persona sabotear por cualquier medio la economía socialista y los intereses públicos.

Artículo 9. El Estado pone en práctica el siguiente principio socialista: "El que no trabaja no come" y "de cada uno, según su capacidad; a cada uno, según su trabajo".

El Estado protege el derecho de propiedad de los ciudadanos sobre sus ingresos obtenidos mediante el trabajo, sus ahorros, sus casas y otros medios de subsistencia.

Artículo 10. El Estado aplica el principio de empeñarse en la revolución y promover la producción, el trabajo y los preparativos para enfrentar la guerra; impulsa el desarrollo planificado y proporcionado de la economía socialista tomando la agricultura como base y la industria como factor dirigente y poniendo en pleno juego la iniciativa de los organismos tanto centrales como locales; mejora gradualmente la vida material y cultural del pueblo sobre la base del constante crecimiento de la producción social, y consolida la independencia y seguridad del país.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA (1954)

Artículo 4. La República Popular China, apoyándose en los órganos del Estado y en las fuerzas sociales, por medio de la industrialización socialista y de las transformaciones socialistas, asegura el aniquilamiento gradual del sistema de explotación y la edificación de la sociedad socialista.

Artículo 5. En la República Popular China existen actualmente las siguientes formas fundamentales de *propiedad sobre los medios de producción*: propiedad del Estado, es decir, la propiedad de *todo el pueblo*; propiedad *cooperativa*, es decir, propiedad colectiva de *las masas trabajadoras*: propiedad de los *trabajadores individuales*; *propiedad de los capitalistas*.

Artículo 6. El sector estatal de la economía es un sector socialista basado en la propiedad de todo el pueblo. Este sector es la fuerza dirigente de la economía nacional y la base material para la realización de las transformaciones socialistas por el Estado. El Estado asegura la preferencia al desarrollo del sector estatal de la economía.

Los yacimientos minerales, las aguas, así como los bosques, las *tierras vírgenes* y otros recursos que, de acuerdo con la ley, son propiedad del Estado, pertenecen a todo el pueblo.

Artículo 7. El sector cooperativo de la economía es un sector socialista basado en la propiedad colectiva de las masas trabajadoras, o un sector semisocialista basado en la propiedad colectiva parcial de las masas trabajadoras. Esta propiedad colectiva parcial de las masas trabajadoras es una forma transitoria por medio de la cual los campesinos individuales, los artesanos individuales y otros trabajadores individuales se organizan en su progreso hacia la propiedad colectiva de las masas trabajadoras.

El Estado protege la propiedad cooperativa, estimula, orienta y ayuda al desarrollo del sector cooperativo, pues considera que el fomento de las cooperativas de producción es el medio principal para transformar la explotación agrícola individual y la producción artesana individual.

Artículo 8. El Estado, de acuerdo con la ley, protege el derecho de propiedad de los campesinos sobre la tierra y otros medios de producción.

El Estado enseña y ayuda a los campesinos individuales a incrementar la producción, y estimula su agrupación voluntaria en cooperativas de producción, de abastecimiento y venta y de crédito.

El Estado sigue una *política de limitación y liquidación gradual de la hacienda de los campesinos ricos*.

Artículo 9. El Estado, de acuerdo con la ley, protege el derecho de propiedad sobre los medios de producción de los artesanos y demás trabajadores individuales no agrícolas.

El Estado orienta y ayuda a los artesanos individuales y a otros trabajadores individuales no agrícolas en el mejoramiento del gobierno de su negocio, y les estimula a que se organicen voluntariamente en cooperativas de producción y de abastecimiento y venta.

Artículo 10. El Estado, de acuerdo con la ley, *protege el derecho de propiedad de los capitalistas sobre los medios de producción y sobre otros capitales*.

La política del Estado con respecto a la *industria* y el *comercio* capitalistas, es de *utilización, limitación y transformación* de los mismos. El Estado utiliza el papel positivo de la industria y del comercio capitalistas, que favorece el bienestar nacional y la prosperidad del pueblo; limita su papel negativo, que perjudica el bienestar nacional y la prosperidad del pueblo; estimula y orienta su transformación en distintas formas del sector del capitalismo de Estado, y *sustituye gradualmente la propiedad de los capitalistas por la propiedad de todo el pueblo*. Para ello se vale de la *inspección* que ejercen los órganos administrativos del Estado, de la dirección que imprime el sector estatal de la economía y de la *inspección obrera*.

El Estado prohíbe todo acto ilegal de los capitalistas que lesione el interés público, desorganice la economía de la sociedad y sabotee los planes económicos del Estado.

Artículo 11. El Estado *protege el derecho de propiedad de los ciudadanos sobre los ingresos legítimos, los ahorros, las casas de vivienda y otros medios de existencia.*

Artículo 12. El Estado, de acuerdo con la ley, protege el *derecho* de los ciudadanos a la *herencia de la propiedad privada.*

Artículo 13. El Estado, en beneficio del interés público y de acuerdo con las condiciones determinadas por la ley, puede expropiar con la correspondiente indemnización, tomar en usufructo o nacionalizar la tierra y otros medios de producción en la ciudad y en el campo.

Artículo 14. El Estado prohíbe el uso de la propiedad privada en perjuicio del interés público.

Artículo 15. Mediante los planes económicos, el Estado dirige el desenvolvimiento y la transformación de la economía nacional y así acrecienta sin cesar las fuerzas productivas con el fin de elevar el nivel material y cultural del pueblo, salvaguardar la independencia y reforzar la seguridad del país.

d) *Constituciones de Africa al Sur del Sahara*

1. Somalia	1960
2. Senegal	1963
3. Togo	1963
4. Sudán	1973
5. Guinea - Bissau	1974
6. Mozambique	1975
7. Madagascar	1975

1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE SOMALIA (1º DE JULIO DE 1960)

Artículo 24. La propiedad está garantizada por ley, la cual especifica los medios de la adquisición y las limitaciones al goce de ella, en orden de asegurar su función social.

La propiedad puede ser expropiada sólo por razones de interés público y bajo los procedimientos establecidos por la ley, basada en una compensación equitativa y oportuna.

(Traducción del inglés).

2. CONSTITUCION DE SENEGAL (3 DE MARZO DE 1963)

Artículo 56. La Asamblea Nacional detenta el poder legislativo; solamente ella puede legislar.

La ley fijará las regulaciones concernientes:

La nacionalización de empresas y la transferencia de la propiedad de empresas del sector público al sector privado.

(Traducción del inglés).

3. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE TOGO
(5 DE MAYO DE 1963)

Artículo 11. El derecho a la propiedad está garantizado por la Constitución. Solamente puede ser restringido en caso de utilidad pública, determina de acuerdo a las formas legales y sujeta a una previa y justa indemnización.

Artículo 49. El Presidente de la República y los diputados de la Asamblea Nacional tienen igual derecho a la iniciativa en materia de legislación.

Las leyes deben también establecer las regulaciones concernientes:

...la nacionalización de empresas y la transferencia de la propiedad desde el sector público al sector privado.

(Traducción del francés).

4. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE SUDAN
(8 DE MAYO DE 1973)

Artículo 31. La economía sudanesa estará dirigida a la realización de los planes de desarrollo con el fin de lograr una sociedad de suficiencia y justicia y el Estado deberá poseer y manejar los medios de producción fundamentales de la economía.

Artículo 32. La economía sudanesa consistirá en las actividades de los siguientes sectores:

El sector público

El cual será un sector pionero y dirigirá el progreso en todos los campos con el propósito del desarrollo, estará basado en la propiedad pública y estará sujeto al control del pueblo.

El sector cooperativo

El cual estará basado en la propiedad colectiva de todos los miembros participantes en las sociedades cooperativas. El Estado cuidará las sociedades cooperativas y la ley regulará su formación y manejo.

El sector privado

El cual estará basado en la propiedad privada no explotadora. El Estado protegerá y alentará y organizará sus funciones para que juegue un rol positivo y activo en la economía nacional.

El sector mixto

El cual estará basado en la propiedad conjunta entre el Estado y el Sector Privado.

Artículo 33. El derecho de propiedad privada estará garantizado para todos los ciudadanos a menos que esté en contra del interés público, y la herencia y donación, de acuerdo con la ley, están garantizadas. El Estado reconoce el útil rol social jugado por la propiedad privada en el campo de la producción y en apreciación de su responsabilidad.

Artículo 34. La propiedad privada no será confiscada excepto por interés público, en concordancia con la ley y mediante el pago de una justa compensación.

Artículo 35. La propiedad pública es inviolable y es el deber de todo ciudadano el preservarla y protegerla y será empleada para el bienestar del pueblo.

Artículo 37. Las riquezas y recursos naturales debajo o sobre la tierra o dentro de las aguas territoriales serán propiedad del Estado y el Estado asegurará su apropiada explotación.

(Traducción del inglés).

5. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE GUINEA-BISSAU (SEPTIEMBRE DE 1974)

TÍTULO I

De los fundamentos y de los objetivos

Artículo 8. El Estado juega un rol decisivo en la planificación y el desarrollo armonioso de la economía nacional. La propiedad del Estado colonialista y la de traición a la patria vienen a ser de la propiedad nacional

Artículo 9. El Estado de Guinea-Bissau es parte integrante de Africa. Su lucha por la liberación del continente africano del colonialismo, del racismo y

del neocolonialismo y por la unidad de los pueblos africanos, sea en la escala continental, sea en la escala regional, sobre la base del respeto de la libertad, de la dignidad y del derecho al progreso político, económico, social y cultural de su pueblo.

TÍTULO II

De los derechos, de las libertades y de los deberes fundamentales

Artículo 11. De acuerdo con los principios fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y con los objetivos revolucionarios y democráticos de la presente Constitución, el Estado garantiza a todos los ciudadanos los derechos fundamentales cuya realización busca el desarrollo de su personalidad y el desarrollo de la sociedad. El Estado crea las condiciones políticas, económicas y culturales necesarias, a fin de que los ciudadanos puedan efectivamente gozar de sus derechos y desempeñar íntegramente sus deberes.

Artículo 14. El Estado considera el trabajo y la instrucción como derechos y deberes fundamentales para todos los ciudadanos. Para el desarrollo de su economía nacional, el Estado creará progresivamente las condiciones necesarias a su cumplimiento.

(Traducción del francés).

6. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA POPULAR DE MOZAMBIQUE (20 DE JUNIO DE 1975)

Faits etc Documents.

Artículo 4. La República Popular de Mozambique tiene por objetivos fundamentales:

La eliminación de las estructuras de opresión y de explotación coloniales y tradicionales y de la mentalidad *subyacente*;

La extensión y el reforzamiento del Poder Popular Democrático;

La edificación de una economía independiente y de la promoción del progreso cultural y social;

La defensa y la consolidación de la independencia y de la unidad nacional;

El establecimiento y el desarrollo de las relaciones de amistad y de cooperación con otros pueblos y Estados;

La prosecución de la lucha contra el colonialismo y el imperialismo.

Artículo 6. La República Popular de Mozambique, toma la agricultura como base y la industria como factor dinámico y decisivo. Orienta su política

económica en el sentido de la liquidación del subdesarrollo y de la creación de las condiciones para la elevación del nivel de vida del pueblo trabajador. En la persecución de este objetivo, el Estado se basa principalmente sobre la fuerza creativa del pueblo y sobre los recursos económicos del país, dando un apoyo total a la producción agrícola, promoviendo la valorización adecuada de las empresas de producción y procediendo a la explotación de los recursos naturales. En el proceso de edificación de la base económica avanzada de la República Popular de Mozambique, el Estado procederá a la liquidación del sistema de explotación del hombre por el hombre.

Artículo 8. La tierra y los recursos naturales situados en el suelo y el subsuelo, y en la plataforma continental de Mozambique, son propiedad del Estado. El Estado determina las condiciones de su valoración y de su uso.

La República Popular de Mozambique reconoce la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, adoptada por la XXIX sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Artículo 9. El Estado promueve la planificación de la economía, en vista de garantizar la valoración correcta de las riquezas del país y su utilización a beneficio del pueblo mozambiqueño.

Artículo 10. En la República Popular de Mozambique, el sector económico del Estado es el elemento dirigente y estimulante de la economía nacional.

La propiedad del Estado se beneficia de una protección especial, su desarrollo y su expansión son responsabilidad de los órganos del Estado, organizaciones sociales y ciudadanas.

Artículo 11. El Estado exhorta a los campesinos y trabajadores individuales a organizarse en las formas colectivas de producción a quienes apoyen y orienten el desarrollo.

Artículo 12. El Estado reconoce y garantiza la propiedad personal.

Artículo 13. La propiedad privada se encuentra atada a obligaciones. La propiedad privada no puede ser utilizada en detrimento de los intereses definidos por la Constitución.

La renta y la propiedad privada están sujetas a los impuestos progresivos, fijados según criterios de justicia social.

Artículo 14. El capital extranjero podrá ser autorizado a operar en el plan de la política económica del Estado.

(Traducción del francés).

7. CONSTITUCION DE MADAGASCAR (31 DE DICIEMBRE DE 1975)
(REPUBLICA DEMOCRATICA DE MADAGASCAR)

Faits et Documents.

Artículo 7. La propiedad pública de los principales medios de producción, de los recursos naturales, de las industrias y de las actividades fundamentales para la vida y el progreso de la Nación;

La gestión de la producción, por los productores organizados democráticamente según el espíritu de la revolución socialista;

El desenvolvimiento autónomo, equilibrado y armonioso de una economía *matriz* por el pueblo.

El gobierno del pueblo trabajador que por sí mismo constituye el fundamento de la organización social y política de la República Democrática de Madagascar.

Artículo 30. La ley garantiza el derecho a la propiedad individual, particularmente de la casa de habitación de los miembros de la familia, de los bienes de uso, de los elementos que concurren al confort y al bienestar material, y de la explotación económica familiar o artesanal, bajo la reserva de los límites impuestos por la propiedad de la colectividad, las necesidades de nacionalización y la expropiación por utilidad pública.

Artículo 31. El derecho de propiedad individual no puede ser ejercido contrariamente a la utilidad social, pues debe contribuir al bien de la colectividad.

Artículo 32. A fin de realizar la explotación racional de la tierra, de aumentar la producción nacional y de establecer las rentas sociales y económicas equitativas entre los miembros de la colectividad, la ley puede imponer obligaciones o limitaciones a la propiedad financiera privada.

Artículo 33. La participación de cada ciudadano a los gastos públicos debe ser progresiva y calculada en función de su capacidad contributiva.

Artículo 35. Los bienes y los intereses del dinero del Estado y sus colectividades socialistas no pueden sufrir de ningún *atentado*.

La dilapidación y la malversación del Estado y sus colectividades socialistas constituyen, según el caso, un delito o un crimen que será reprimido con sumo rigor por la ley y podrá entrañar la defensa de los derechos civiles y políticos y la confiscación de los bienes de su autor.

Artículo 36. El Estado castiga con la severidad más grande cualquiera que ignore, por su hecho o por su omisión, a los objetivos de la Revolución, a la edificación de la economía socialista o al interés público.

Artículo 37. El Estado protege a la familia, la mujer y al niño, y reconoce a todo ciudadano el derecho de fundar una familia y de transmitir en herencia los bienes personales.

(Traducción del inglés).